

**"LA PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ECUADOR: ESTUDIO BASADO EN EL DERECHO  
INTERNACIONAL Y CONSTITUCIONAL".**

*Tania Patricia Molina Reyes*

**XIII MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  
(UNIVERSIDAD DE ALCALÁ)**

## **INDICE DE MATERIAS. -**

ABREVIATURAS. –.....	1
INTRODUCCION.....	2
1.- LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ECUADOR .....	6
1.1.- PUEBLOS AMAZÓNICOS.....	13
2: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A NIVEL INTERNO EN ECUADOR: ESTUDIO DE LA PRÁCTICA INTERNA .....	15
2.1.- UN PRECEDENTE DE LA JUSTICIA INDÍGENA: EL CASO LA COCHA .....	20
2.2.- LA JUSTICIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PUEBLOS AMAZONICOS. - .....	30
3: EL RÉGIMEN JURÍDICO INDÍGENA DE ECUADOR Y LA PRÁCTICA INTERNACIONAL .....	33
3.1.- LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ECUADOR .....	38
3.2.- PRONUNCIAMIENTOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN CASOS DE PUEBLOS INDÍGENAS DE ECUADOR .....	46
3.3.- SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE IDH, RESPECTO EL CASO DEL PUEBLO INDÍGENA SARAYAKU VR. ECUADOR.....	47
3.4.-CASO TAGAERI Y TAROMENANE EN LA CIDH.....	57
4.- CONCLUSIONES. – .....	60
V.- BIBLIOGRAFÍA.....	63

## ABREVIATURAS. –

<b>CADH</b>	Convención Americana de Derechos Humanos
<b>CCE</b>	Corte Constitucional ecuatoriana.
<b>CGC</b>	Compañía General de Combustibles
<b>CIDH</b>	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
<b>CODENPE</b>	Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas
<b>CONAIE</b>	Confederación de Nacionalidades Indígenas
<b>CORTE IDH</b>	Corte Interamericana de Derechos Humanos
<b>ECAURUNARI</b>	Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, "Movimiento de los Indígenas del Ecuador".
<b>EIA</b>	Estudio de Impacto Ambiental
<b>INEC</b>	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
<b>OEA</b>	Organización de Estados Americanos
<b>OIT</b>	Organización Internacional del Trabajo
<b>ONU</b>	Organización de las Naciones Unidas
<b>SIDH</b>	Sistema Interamericano de Derechos Humanos
<b>UNESCO</b>	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. En castellano Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
<b>ZITT</b>	Zona Intangible Tagaeri- Taromenane

## INTRODUCCION

El Ecuador es un país autodenominado multicultural y pluriétnico, con lo cual asume la existencia de pueblos y nacionalidad indígenas y de la misma manera asume la coexistencia de un pluralismo jurídico que permite a los pueblos y nacionalidades indígenas adoptar y resolver los conflictos o controversias que se susciten al interior de su pueblo o comunidad.

En este sentido, los Derechos de los Pueblos Indígenas en los últimos 20 años han evolucionado de manera positiva tanto en la legislación ecuatoriana como en el Derecho Internacional, asumiendo un importante lugar en relación con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Los Derechos de los pueblos indígenas han trascendido el de un reconocimiento individual de derechos a un reconocimiento colectivo, que permite a los pueblos indígenas el ejercicio de varios derechos antes relegados, pero ahora en pleno vigor, por cual organismos internacionales como la ONU, la OEA, y organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han pronunciado sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los Organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, han prestado particular atención a los derechos indígenas, los cuales han contribuido positivamente al desarrollo progresivo de los Derecho indígenas en Ecuador, mediante la interpretación general de los derechos humanos individuales y de esta manera se proteja también los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer a los lectores la realidad de los pueblos indígenas en Ecuador, sus conformación, sus costumbres, su realidad de cara al ordenamiento jurídico ecuatoriano y la importancia de los pronunciamientos por parte de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual ha emitido los lineamientos generales para que al interior del Ecuador, se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, que por décadas han luchado por reconocimiento, pero sobre todo han luchado por que el Estado respete los derechos consagrados en la propia Constitución de la

República y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Ecuador.

Así también, en este trabajo se contempla una reseña de los pueblos indígenas del Ecuador, y la importancia de la evolución de la normativa jurídica interna con el propósito de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas, así como también el reconocimiento de su propio sistema de justicia, el cual no solo ha sido cuestionado sino también que ha generado una disputa de poder entre la aplicación de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, generando una serie de criterios respecto a la legalidad y pertinencia de la solución de controversias aplicando la justicia indígena. La disputa respecto a este tema gira en torno a la ejecución de las penas, ya que por una parte la jurisdicción ordinaria en aplicación de la legislación ecuatoriana sanciona conforme las normas tipificadas, mientras que la jurisdicción indígena, fundamenta sus decisiones en el criterio de las autoridades considerando el beneficio para su pueblo o comunidad.

Esta disparidad de criterios ha desembocado la errónea aplicación de ambas jurisdicciones, lo cual genera inseguridad jurídica para quienes se encuentran sometidos a cualquiera de estas dos jurisdicciones por delitos cometidos al interior de un pueblo indígena.

Sin embargo y pese al reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, las violaciones a los derechos de los mismos siguen siendo frecuentes en el Ecuador, cuya causa principal para que se den están violaciones de derechos, es la explotación de recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas. Se presenta en este trabajo un análisis de la vulneración de los derechos de los pueblos amazónicos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, en cuyos territorios hasta el día de hoy se mantiene la concesión de campos para la explotación petrolera, inobservando las disposiciones descritas en el derecho internacional, Constitución de la República, legislación interna que en esta materia se ha expedido.

Este trabajo tiene por objeto adicional el de suministrar información general relativa a los pueblos indígenas del Ecuador, así como brindar una visión de sus formas de organización, y los mecanismos y procedimientos que se han utilizado para el

reconocimiento de sus derechos en el marco de los Derechos Humanos Interamericanos. Si bien los mecanismos descritos en el presente trabajo no han sido lo suficientemente efectivos y no se ha resuelto los casos de pueblos indígenas, sí que han conducido a la generación de beneficios concretos a nivel interno, tanto en el ámbito nacional como local, considerando que a futuro estos mecanismos sean tantos efectivos como eficaces.

No menciona qué metodología sigue en el trabajo: ver curso de la OEA del prof. Jiménez Piernas sobre temas metodológicos.

Una vez definido el marco teórico para el desarrollo del estudio de derecho internacional y constitucional para la protección de los pueblos indígenas en Ecuador, el presente capítulo comprende los estudios que se consideraron necesarios y pertinente para un corrector análisis.

Así se ha realizado (1) un levantamiento de información bibliográfica referente a la estructura organizativa y política, costumbres, métodos de resolución de conflictos y territorio de los pueblos indígenas, de lo cual se obtuvo un conocimiento amplio de la realidad de los pueblos indígenas en el Ecuador; (2) un análisis del marco legal ecuatoriano, de trabajos y estudios relacionados con la protección de los pueblos indígenas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante el estudio de doctrina y jurisprudencia relevante, de lo cual se obtuvo el enfoque necesario respecto a las alternativas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Ecuador, así como, la importancia que esta protección tiene en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; (3) con la información mencionada en los puntos 1 y 2 se estableció la pertinencia e importancia de realizar un estudio que permita conocer a fondo la evolución en cuanto a la protección de Derechos Humanos a los pueblos indígenas, mismos que han sido constituidos como un grupos humanos históricamente vulnerable; En virtud de lo anterior, en el presente trabajo se realiza un análisis de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y la importancia de que la República del Ecuador se autodetermine como un país multiétnico y pluricultural, conforme lo determina la legislación interna, lo cual ha promovido un avance significativo respecto al respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas en todas las esferas del Gobierno nacional.

El análisis no se centra únicamente en los pueblos que han luchado por un reconocimiento efectivo de sus derechos, sino también se hace mención a los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía ecuatoriana y los denominados pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario, de los cuales su voz no es escuchada sin embargo presentan manifestaciones de desacuerdo respecto a la irrupción de empresas petroleras y madereras concesionadas por el Estado.

Así también, se realiza un análisis del régimen jurídico aplicable en el Ecuador respecto a los pueblos y nacionalidades indígenas, en el mismo que se establece la importancia del reconocimiento del pluralismo jurídico, pero un reconocimiento que cumpla con los parámetros establecidos en la propia legislación nacional, es apego al respeto de los derechos humanos tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas. Al respecto el caso La Cocha, sentó un precedente respecto al reconocimiento del pluralismo jurídico en el Ecuador, dejando notar la deficiencia en la administración de justicia y la falta de conocimiento del alcance e importancia del legítimo pluralismo jurídico en un Estado.

Finalmente, consta en el presente trabajo un estudio del Régimen Jurídico del Ecuador respecto a los pueblos indígenas y la practica internacional en este sentido, en el cual se describe los pronunciamientos de la CIDH respecto al estado de los pueblos indígenas en el Ecuador, así como también como se han desarrollado los casos que han llegado a conocimiento de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la importancia de la sentencia emitida por la Corte IDH en relación al caso del pueblo indígena ecuatoriano Sarayaku.

## 1.- LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN ECUADOR

En el Ecuador existen 13 nacionalidades indígenas con presencia en las tres regiones del país, cada nacionalidad mantiene su propia lengua, cultura, tradiciones e incluso son su propia jurisdicción.

Desde la década de los cuarenta, las organizaciones indígenas actuaron en representación de los pueblos indígenas, con lo cual se consagra una nueva estructura en cuanto a los pueblos o nacionalidades sujetas a la legalidad incorporada en la actual normativa ecuatoriana, que determina criterios de identidad aplicables a la población indígena.

De acuerdo a la definición del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. CODENPE, “se entiende por nacionalidad al pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia”.<sup>1</sup>

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- INEN, hace una distinción entre nacionalidad y pueblo indígena y determina que Nacionalidad indígena “es el conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma y cultura comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad.”; mientras que un pueblo indígena “se define como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad

---

<sup>1</sup> [www.codenpe.gob.ec/sidenpe.htm](http://www.codenpe.gob.ec/sidenpe.htm).



ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal.”<sup>2</sup>

El reconocimiento oficial de los pueblos indígenas por parte del CODENPE, impulsa a otros grupos para que recurran a su historia, lo cual lo llevan a debates dentro de su comunidad sobre el alcance jurídico del concepto de pueblo, con el fin de iniciar procesos de reconstitución de los mismos, con este proceso surgen otros pueblos bajo el auspicio y asesoramiento de las organizaciones indígenas que gestionaron su reconocimiento legal.

Es importante también, señalar que existen otros grupos humanos, tales como: las comunidades culturales, pueblos aislados y foráneos, nacionalidades minoritarias, aborígenes, originarios o tribales, nativos, pueblos y nacionalidades indígenas, cuya población asciende aproximadamente a 300 millones de personas en más de 70 países del mundo, y que representan un porcentaje importante con respecto a la población total en el mundo.

Es por esta razón que, en la Constitución del Ecuador, se declara a este como un país pluricultural y multiétnico, reconociendo de esta manera a las colectividades o a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, respetando sus diferentes formas de vida, sistemas de organización social, política, económica y religiosa, así como también sus diversas concepciones del mundo.

Así en la actualidad coexisten las siguientes nacionalidades: Awá – Chachi, Tsáchila, Manta Huancavilca, Epera, Siona, Secoya, Cofán, Waorani, Zápara, Shuar, Achuar, Shiwiar, Kichua de la Amazonía y Kichua de la Sierra con sus respectivos pueblos.

Como se mencionó al declarar al Ecuador como un país pluricultural y multiétnico, los pueblos indígenas se convirtieron en sujeto de derechos, y una de las características principales de este nuevo sujeto de derecho es su carácter colectivo y por tanto como sujeto colectivo tienen un derecho fundamental al igual que los individuos, esto es el derecho a la vida, a la existencia como colectividades diversas, a no ser sometido a desaparición

---

<sup>2</sup>[http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com\\_content&view=article&id=187&Itemid=138&lang=es?TB\\_iframe=true&height=600&width=1000](http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=138&lang=es?TB_iframe=true&height=600&width=1000)

forzada. La existencia de este derecho fundamental permite que se deriven otros derechos, por una parte lo derechos que tiene que ver con reproducir su organización social y autoridad; mantener y desarrollar la identidad política, económica, social, espiritual, lingüística y cultural, así como también derechos tales como participar en la administración, uso, usufructo y conservación de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, a ser consultados, participar de los beneficios e indemnización, a participar con representantes en organismos del Estado, de entre otros.<sup>3</sup>

En virtud de esta declaración y al ser reconocidos los pueblos indígenas como sujetos de derechos se reconoce tácitamente la aplicación de una jurisdicción especial aplicable a todos los pueblos indígenas legalmente reconocidos, pero ¿qué significa el reconocimiento de esta jurisdicción especial?

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 57, se reconoce una serie de derechos para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dentro de los más importantes cabe citar:

- “1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.*
- 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.*
- 3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación.*
- (...)6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.*
- 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.*
- 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.*
- 10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará*

---

<sup>3</sup> R. LLASAG FERNANDÉZ, Derechos colectivos y administración de justicia indígena, en Judith Salgado, comp., *Justicia Indígena, aporte para el debate*, Ediciones Abya- Yala, Quito, 2002, p. 127.

*medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.*

*El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres”.*

Como consecuencia de esto, se consagra en el artículo 171 de la Constitución de la República la jurisdicción especial indígena:

*“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.*

*El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.*

Con esta declaración expresa que consta en la Constitución del Ecuador, se instaura el denominado pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia (supuestamente en términos de igualdad) de diversos órdenes normativos<sup>4</sup>, sin embargo, se puede asegurar que estos dos sistemas de administración de justicia son perfectamente compatibles, siempre que se guarde un respeto mutuo dentro de los ámbitos jurisdiccionales, consagrados en la Constitución de la República y en la Ley, esto es los órganos de la función judicial por una parte mientras que por la otra las autoridades de los pueblos indígenas<sup>5</sup>.

Sin embargo, cabe indicar que el reconocimiento y sobre todo la aceptación de que los pueblos indígenas apliquen sus normas y procedimientos propios para la administración de justicia, desde que se consagro en la Constitución de 1998 la pluriculturalidad, ha generado resistencias en un sector de la sociedad nacional, que no admite la existencia de múltiples y profundos avances sobre la pluriculturalidad jurídica<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> C. WALSH, Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico; en SALGADO, Judith, comp. *La Justicia Indígena: Aportes para un debate*; Ediciones Abya- Yala, 2000, p. 30.

<sup>5</sup> G. GALARZA PAZ, Justicia y Derecho en la Administración de Justicia Indígena, en SALGADO, Judith, comp. *La Justicia Indígena: Aportes para un debate*; Ediciones Abya- Yala, 2000, p. 82.

<sup>6</sup> N. PACARI, *Pluralidad Jurídica; una realidad constitucionalmente reconocida*, en J. SALGADO, comp. *La Justicia Indígena: Aportes para un debate*; Ediciones Abya- Yala, 2000, p. 83.

En un Estado multiétnico y pluricultural como lo es el Ecuador, resulta paradójica la idea de hablar sobre la existencia de discriminación, inequidad y exclusión, sin embargo, estos fenómenos están ligados íntimamente a los órdenes distintos de vida social, en el presente caso, a la de los pueblos indígenas del Ecuador, tales como la cultura, la economía y la política respectivamente.

Es importante tener una idea clara de los fenómenos señalados, en este sentido, a la discriminación la asociamos con el conjunto de prácticas que niegan o impiden el goce de derechos en razón de diferencias étnicas o culturales, y están fundadas en actitudes tales como prejuicios o estereotipos socialmente generalizados. En lo que respecta a la inequidad es respecto al deficiente acceso y distribución de bienes, servicios y oportunidades entre los distintos sectores de la población que también tiene que ver con factores sociales y culturales. Finalmente, respecto a la exclusión se puede hacer relación con el fenómeno por el cual parte de la población se queda fuera de los mecanismos de participación y representación de sus intereses en el ámbito político, ya que sus formas de organización no se enmarcan en la operación del sistema democrático, tal como está estructurado en el Ecuador.<sup>7</sup>

Es importante señalar que de acuerdo al último censo poblacional realizado por el INEC, en el año 2010, se estima que alrededor del 7% de la población se identifica como indígena, la misma que en su mayoría habitan en territorios de la sierra ecuatoriana, sin embargo, las organizaciones indígenas no están totalmente de acuerdo con las cifras señaladas por el INEC, ya que para estas organizaciones el porcentaje es mucho mayor, según la CONAIE, los indígenas son más del 30% de la población, con estas cifras se puede determinar que reconocerse como indígena no resulta cómodo desde el punto de vista de la valoración social.

En otro aspecto y pese a ser bajo el porcentaje de grupos indígenas, la mayoría de los mismos cuentan con un idioma propio, tal es así, que en Ecuador se hablan 14 lenguas

---

<sup>7</sup> S. GRANDA M.; y A. MARTÍNEZ FLORES, eds. *Derechos de los pueblos indígenas del Ecuador. Guía para facilitar talleres*. Quito: Universidad Politécnica Salesiana y Red Internacional de Estudios Interculturales, 2007.

ancestrales, según datos de la Secretaría del Buen Vivir, distribuidas de la siguiente manera: En la región **Costa**, la nacionalidad Awa, el Awapít; Chachi, Cha palaa; Epera, Siapede; Tsáchila, Tsa'fiquí. En la **Amazonía**, la nacionalidad Cofán, el Ingae; Secoya y Siona, el Paicoca; Huaorani, Huao Tedeo; Shiwiar, Shiwiar Chicham; Zápara, Zapara; Achuar, Achuar Chicham; Andoa, Andoa; Kichwa, kichwa; Shuar, Shuar Chicham. En la **Sierra**, la nacionalidad Kichwa con sus 18 pueblos originarios se habla el idioma kichwa.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores la Constitución de la República, establece como idiomas oficiales el castellano, Kichwa y shuar, sin embargo, los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas en que habitan y en los términos que se determina en el marco normativo ecuatoriano.

En el mismo sentido, los pueblos y nacionalidades indígenas cuentan con garantías constitucionales que les permiten preservar y conservar el uso de los idiomas, bajo la idea de que *El idioma es la expresión cultural y forma parte de la historia de un pueblo; constituye el eje articulador de los saberes y conocimientos de cada pueblo, de cada cultura y es un medio de integración social, de educación y de prosperidad*<sup>8</sup>.

Es importante resaltar que la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de mayo de 2007, exhortó a los Estados miembros y a la Secretaría a “*promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo*”, tomando como antecedente la declaración por parte de la Conferencia General de la UNESCO del día internacional de la Lengua Materna.

Cabe resaltar que los idiomas tradicionales no se los puede traducir literalmente al castellano ya que los mismos tienen particularidades que hacen imposible la traducción, por ejemplo, *Tsa'fiquí de la nacionalidad Tsáchila significa “verdadera palabra, decir la verdad, hablar con la verdad”*, con lo cual se comprueba que los idiomas de los pueblos y nacionalidades indígenas expresan lo que es importante para ellos.

---

<sup>8</sup> <http://www.secretariabuenvivir.gob.ec/sabias-que-en-el-ecuador-se-hablan-14-lenguas-ancestrales/>

Sin embargo y pese a los esfuerzos realizados para mantener los diversos idiomas existentes en el territorio ecuatoriano, no debemos olvidarnos que la frontera lingüística ha sido en todas las sociedades, una frontera definitoria de muchas desigualdades sociales, económicas, educativas, políticas, etc. Y más que eso, en barrera, lo cual se incrementa en los países en vías de desarrollo como el Ecuador<sup>9</sup>.

Considerando los avances que ha habido en Ecuador, respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas, se debe reconocer la participación y la incursión en la política de los mismos, que en procura de ejercer sus derechos políticos, han creado agrupaciones que se han convertido en actores políticos, tal es el caso de la CONAIE- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que sin lugar a dudas es el brazo político del Movimiento Pachakutik, que ha incursionado en la vida política del país, modificando el escenario electoral de manera radical. El Movimiento Pachakutik ha tenido cabida tanto en el ámbito nacional como provincial, de esta manera en los últimos años los pueblos indígenas han tenido representación en dignidades de votación popular, llegando incluso a generar alianzas con otros partidos políticos, en la búsqueda de representación. De las mismas en el año 2002, el coronel Lucio Gutiérrez es nombrado Presidente de la República y son elegidos 11 diputados del movimiento Pachakutik, como parte de la alianza, muchos indígenas asumen responsabilidades en dependencias del Estado<sup>10</sup>.

En este sentido, a decir de Luis Macas, representante indígena *“Uno de los valores profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea: ante la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social. Perviven Valores, conocimientos, sabidurías, pero, sobre todo, aún están vigentes*

---

<sup>9</sup>C. HARE, Por un nuevo Estado, pluricultural y plurilingüe, en HERZFELD, Anita; y, LASTRA, Yolanda, *Las causas sociales de desaparición y del mantenimiento de las lenguas en las Naciones de América*, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora- México, 1999, p. 295.

<sup>10</sup> A. PARELLADA, *América del Sur*, en VINDING, Diana, *El mundo indígena 2002-2003*, Editorial IWGIA, Copenhague- Dinamarca, 2003, p. 143.

*instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las adversidades”.*<sup>11</sup>

## 1.1.- PUEBLOS AMAZÓNICOS

Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana han sufrido varios conflictos con las compañías petroleras que operan en el territorio amazónico, en razón de que se oponen a la explotación petrolera en sus territorios.

En este sentido, se ha considerado necesaria la consulta previa a los pueblos indígenas, ya la participación de los grupos étnicos es vital, ya que, al ser los habitantes de un determinado territorio, deberán ser los que acepten o rechacen una propuesta, tomando en cuenta que son estos pueblos los que en un futuro tendrán que convivir con los impactos en principio ambientales, pero también tendrán que tolerar los impactos sociales, económicos, culturales, entre los más importantes.

La inclusión de los pueblos indígenas en las decisiones o la vida política de un país, no es una problemática que aqueja únicamente al Ecuador, sino más bien, se estima que la mayoría de los indígenas del mundo, carecen de presencia, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.

Sin embargo, como se ha dicho en el Ecuador pese a que la historia determina la falta de derechos de los pueblos indígenas en nuestro territorio, en la actualidad mediante instituciones forman parte de la vida administrativa, social y política del Estado, de este surgimiento de los derechos de los pueblos indígenas se han expedido leyes creadas en defensa del derecho a la consulta previa, propuesto por la CONAIE, y que fue consagrado en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República.

Finalmente, es importante señalar que el territorio de la República de Ecuador, existen pueblos denominados “no contactados” o “pueblos ocultos”, que son indígenas de

---

<sup>11</sup> L. MACAS, La Lucha del movimiento indígena en el Ecuador, *Boletín ICCI (Instituto Científico de Culturas Indígenas)*- ARY Rimay, Año 4, No. 37, abril, 2002.

la Amazonía ecuatoriana que, por vivir en lugares remotos y casi inaccesibles de la selva quedaron, desde el tiempo de la conquista, fuera del contacto con los conquistadores y también de otros indios que se adaptaron, con mayor o menor resolución, a la evolución de la zona. Mientras que para estos pequeños grupos, el retraimiento inicial se prolongó durante la posterior aparición de las naciones americanas y la organización de las mismas y no ha sido enmendado hasta hoy<sup>12</sup>.

Después de décadas de que los conquistadores llegaron a América, estos grupos se han quedado fuera de la evolución política, legal, administrativa de los nuevos Estados, en este caso de Ecuador.

Conclusión hasta la actualidad han quedado olvidados, *pasaron de no existir, como no fuera en leyendas o relatos poco menos que fantasmales*. Hasta la actualidad no hay una ley que reconozca o defienda los derechos de estos pueblos ni su presencia en los territorios de nuestro país, puede decirse que estos grupos son *legalmente inexistentes*.

En Ecuador no se ha realizado una investigación que permita determinar en datos cuantos grupos en aislamiento existente en territorio ecuatoriano, sin embargo, el Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana ha realizado estudios y comprobaciones de hechos que permiten determinar el Estado de los pueblos amazónicos en situación de aislamiento.

En este sentido, se determina la existencia de los siguientes grupos aislados:

**Tangaeri**, pueblo indígena que formaba parte de los Huaorani hasta la década de los 60, renunciaron al contacto y propusieron mantener su territorio contra la irrupción de las empresas petroleras y de otros pueblos indígenas que pretendían invadir su zona. Este grupo de indígenas han protagonizado varios enfrentamientos con obreros de las empresas petroleras, resultado de lo cual ha habido muertes violentas de ambas partes, sin embargo, este grupo indígena ha corrido con peor suerte en este enfrentamiento, ya que el escaso

---

<sup>12</sup> M. CABODEVILLA, Pueblos Ocultos, en Actas del Seminario Regional de Santa Cruz de la Sierra- 20-22 de noviembre de 2006, *Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y contacto inicial en la Amazonía y el Gran Chaco*, Editorial IWGIA, Copenhague- Dinamarca. 2007, pág. 118.



número y las armas empleadas has sido insuficientes frente al Ejército ecuatoriano que vigilo algunas operaciones petroleras, los vigilantes petroleros e incluso los mismos trabajadores que en muchas ocasiones estaban armados.<sup>13</sup>

**Taromenani**, grupo cercano ética y culturalmente a los Huaronai, de este grupo no se tiene información directa, únicamente se conoce que habitan en las cuencas entre los ríos Tiputini- Nashiño- Cononaco. Estos son los pueblos indígenas no contactados de los que se tiene algo de información, sin embargo, es probable que existan otros grupos en la frontera con Perú, que transiten a uno y otro lado de un límite nacional para ellos desconocido.

## 2: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A NIVEL INTERNO EN ECUADOR: ESTUDIO DE LA PRÁCTICA INTERNA

Una vez analizadas las generalidades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, es importante abordar el régimen jurídico aplicable en los casos legales en los que miembros de los pueblos o nacionalidades indígenas han sido protagonistas.

En este sentido, se ha discutido sobre los problemas respecto a la autonomía de los pueblos indígenas que no ha logrado resolver la Constitución de la República del 2008, considerando que la Constitución responde a la necesidad de establecer en el país una unidad política y una identidad cultural en una sociedad de grupos múltiples con muy variados intereses, más no es el resultado de un parto entre partes iguales.

Es por esta razón, que los pueblos indígenas en Ecuador han planteado política y jurídicamente el reconocimiento de la autonomía interna en los territorios usados ancestralmente por los pueblos o nacionalidad indígenas, lo cual implica que las autoridades del cabildo tengan cierto poder para controlar los procesos sociales, económicos y culturales que puedan ocurrir en el seno de cada pueblo indígena, de esta manera también podrían controlar los recursos naturales renovables y no renovables,

---

<sup>13</sup> M. CABODEVILLA, *Pueblos Ocultos*, op.cit, p. 119.

teniendo como resultado la generación de recursos propios, mismo que servirán para solventar las necesidades y cubrir los problemas de los pueblos indígenas de manera interna.

Además, consideran que la autonomía podría ser la solución definitiva a los problemas que asumen se presentan en el interior de los pueblos indígenas, tomando como punto de partida instrumentos internacionales tales como la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales, el Convenio 169 de la OIT, entre otros, en los cuales se contemplan garantizan los derechos de los pueblos indígenas conculcados a lo largo de la historia del Ecuador.

Como se determinó en el capítulo anterior, el Estado ecuatoriano en respuesta a las reivindicaciones del movimiento indígena ha adoptado una serie de medidas que están acorde con las tomadas por otros Estados en Latinoamérica, entre las cuales se encuentran:

- a. La ratificación del Convenio 169 de la OIT;
- b. La creación de un organismo público al servicio de los Pueblos Indígenas: el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE); y,
- c. El reconocimiento constitucional de la pluralidad cultural del Estado y de los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas a través de la adopción de la Constitución alcanzado en 2008<sup>14</sup>.

Bajo este orden de ideas, debemos tener claro que no es posible la plurinacionalidad sin pluralismo jurídico, que es lo que ocurre en el Ecuador desde la Constitución de 1998 y finalmente con la Constitución de 2008, es importante tener claro que el reconocimiento de la pluriculturalidad no solo implica un cambio cultural sino también una transformación económica, social, política y jurídica, lo que en otras palabras quiere decir, es el reconocimiento de una variedad de pluralismos.

---

<sup>14</sup> M. PONTE, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica; Estado multicultural y pueblos indígenas: autonomía y derechos colectivos. Ecuador y su nueva Constitución de 2008, un referente para los pueblos indígenas de América Latina, *Consejo Español de Estudios Iberoamericanos*, Santiago de Compostela- España, 2010, p. 2470.

El pluralismo jurídico implica la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos, legales, paralelos al sistema estatal, o en su defecto, varias practicas alternativas del Derecho dentro de un mismo Estado.

En este sentido, es importante analizar no solo al significado de “pluralismo jurídico”, sino también es importante considerar lo que conlleva la “justicia intercultural”, consideradas como practicas garantizadas en la Constitución de la República, a cargo de los Jueces y también de las autoridades indígenas.

En Ecuador, el Derecho Indígena no responde a un sistema alternativo sino más bien debe ser considerado como un sistema paralelo al estatal, en este sentido, incluso el denominar al Derecho Estatal como “Derecho Ordinario”, podrá ser contraproducente, ya que se entendería automáticamente que el Derecho Indígena es un “Derecho Extraordinario”, y apegándose a la realidad del Ecuador, esto no tendría sentido, ya que el Derecho Indígena aplicado el interior de los pueblos indígenas, es considerado como Derecho ordinario para la comunidad y sus miembros.

Sin embargo, de lo señalado en el párrafo anterior, la propia Constitución de la República en su artículo 171, realiza una diferenciación entre la denominada “jurisdicción Indígena”, con la “Jurisdicción ordinaria”, señalando que la Ley establecerá mecanismos de cooperación entre estos dos tipos de jurisdicción.

Bajo el amparo de la norma constitucional, los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y desarrollar sus propias formas de organización social y por tanto sus propias formas de elección de sus autoridades, en este sentido, cabe señalar que cada pueblo o nacionalidad tiene su propio sistema jurídico, basado en la costumbre, mediante la cual determina que la resolución de un conflicto no constituye un aspecto determinado de la vida, sino forma parte de la vida misma como un todo inseparable<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> X. RON, *El control constitucional de las Decisiones Jurisdiccionales indígenas en Ecuador*, Universidad Andina Simón Bolívar, Programa Internacional de Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional, Quito- Ecuador, 2011, p. 35.

En este orden de ideas, debe quedar claro que las normas constitucionales y las supranacionales no limitan la dinámica propia de sus sistemas ancestrales, así como tampoco disponen la homologación de los mismos, y finalmente no se obliga su adecuación al sistema de justicia ordinario.

En este sentido, los pueblos y nacionalidades indígenas amparados en la norma constitucional que garantiza no solo la conservación, sino también la creación, desarrollo, aplicación y la puesta en práctica de las normas y procedimientos de justicia tradicionales; en este sentido, cabe señalar que los pueblos y nacionalidades indígenas han aceptado y adoptado al interior de su jurisdicción normas de derecho estatal, en cuanto a la elaboración de los Estatutos de sus comunas o la adquisición de personalidad jurídica, entre otras actividades importantes con lo cual han llegado a generar un proceso de compatibilidad entre las normas ancestrales y el derecho ordinario aplicable a todos los ciudadanos del país.

Es importante destacar también, que la creación de normas e instituciones dentro de sus propios pueblos o comunidades se ajusta perfectamente a sus necesidades de justicia, mediante las cuales se logra mantener su identidad específica y el desarrollo de sus bienes materiales, morales y espirituales, los cuales son fundamentales para su subsistencia.

Bajo este orden de ideas y respecto al pluralismo jurídico en el Ecuador, es evidente que los pueblos indígenas en este país son, por historia, generadores de normas y procedimientos para la solución de sus conflictos internos. Sin embargo, es importante tener claro que, con la conquista europea y la imposición obligatoria de todo tipo de costumbres y normas, los pueblos indígenas, no solo de Ecuador sino de América, sufrieron resquebrajamientos al interior de sus estructuras. Pese a ello, se ha logrado preservar normas, principios, valores y procedimientos que, como se menciona en el presente trabajo, se mantienen y ejercen al interior de sus jurisdicciones, lo cual lo conocemos como Derecho Consuetudinario.

Según la doctrina, en cuanto al pluralismo jurídico debe determinarse claramente dos aspectos, de acuerdo a su perspectiva, por un lado, el aspecto socio- cultural, referente a los usos y costumbres vigentes y que forman parte de la vida cotidiana al interior de sus

pueblos o comunas, que existen porque *“son necesarios a la población tanto en términos materiales, como simbólicos o culturales. Esto significa: a) que el sistema de justicia estatal no les es suficiente y culturalmente adecuado; y b) que los sistemas indígenas responden mejor a sus necesidades sociales y a su mundo cultural*<sup>16</sup>; y por otro lado el aspecto jurídico- político, referente a la adopción como norma positiva de la justicia indígena, con lo cual puede entenderse la presión que se puede ejercer por la codificación y regularización del derecho indígena.

Ahora, respecto al Derecho Indígena que como se mencionó esta constitucionalmente reconocido, cabe señalar detalles importantes que lo diferencian del derecho ordinario en el Ecuador, en este sentido varios tratadistas califican al derecho indígena en varios casos como “costumbre”, “usos y Convenciones”, “Usos y costumbre”, “formas tradicionales de resolución de conflictos”, “Derecho consuetudinario, entre otros.”<sup>17</sup>

En este sentido, Juan Larrea Holguín señala que “la costumbre se forma de la repetición de actos, pero no basta esto que podría llamar elemento material, corpus de la costumbre, sino que se requiere de una convicción de su necesidad u obligatoriedad jurídica, *animus de la costumbre*”<sup>18</sup>.

Así también, Arhens señala que la costumbre *“es un producto de la voluntad de individuos, nacida de una serie de actos idénticos y sucesivamente respetados: se forma de manera espontánea y más instintiva que la ley, bajo la impulsión inmediata de las necesidades. Los que primero establecieron una costumbre por sus actos continuamente repetidos, obraron con la convicción firmísima de la conveniencia jurídica de los hechos ejecutados, considerándolos no solamente como buenos y justos para los casos presente, sino también propicio para formar una regla común que sirva de norma para hechos futuros de idéntica analogía. Por esto, las costumbres son, así desarrolladas, engendran*

---

<sup>16</sup> R. YRIGOYEN, El debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho indígena en Guatemala, en Milka Castro y María Teresa Sierra, coord., *Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas en América Latina*, México, 1999, p. 84.

<sup>17</sup> I. FAJARDO, *Pautas de Coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal*, Editorial Fundación Myrna Mack, 1999, Guatemala, p. 11.

<sup>18</sup> J. LARREA, *Manual de Procedimiento Civil*, Editorial Corporaciones y Estudios, Quito- Ecuador, 2002.

*una continuidad en la vida social y en el Derecho, y son respetadas por un sentimiento moral de la comunidad”.*

En este sentido, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE, en el año 2001 definió lo siguiente:

*“Para nosotros los indios, el derecho indígena es un derecho vivo, dinámico, no escrito, el cual a través de un conjunto de normas regula los más diversos aspectos y conductas de convivir comunitario. A diferencia de lo que sucede en la legislación oficial, la legislación indígena es conocida por todo el pueblo, es decir, existe una socialización en el conocimiento del sistema legal, una participación directa en la administración de justicia en los sistemas de rehabilitación que garanticen el convivir armónico”.*<sup>19</sup>

## 2.1.- UN PRECEDENTE DE LA JUSTICIA INDÍGENA: EL CASO LA COCHA

En Ecuador se han presentado varios casos de aplicación de la jurisdicción indígena, los mismos que ha tenido serias repercusiones jurídicas y mediáticas, una de las más importantes es el caso “La Cocha”, el mismo que sentó un precedente negativo para el pluralismo jurídico en el Ecuador.

Por tanto, respecto al caso *La Cocha* la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia Nro. 113-14-SEP-CC, dentro del caso Nro. 0731-10-EP, de 30 de julio de 2014, se pronunció respecto a un tema de justicia indígena, en razón de que el señor Víctor Manuel Olivo Pallo, hermano del señor Marco Olivo Pallo presentó una acción extraordinaria de protección con contra de decisiones de justicia indígena adoptadas el 16 y 23 de mayo de 2010, por las autoridades del pueblo de Panzaleo, nacional Kichwa, de la provincia de Cotopaxi, respecto al asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo.

Con fundamento en el artículo 171 de la Constitución de la República de año 1998 y 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, las autoridades indígenas de las comunidades de La Cocha y Guatopolo conocieron el caso y establecieron la culpabilidad

---

<sup>19</sup> C. PÈREZ, *Justicia Indígena*, Universidad de Cuenca, Cuenca- Ecuador, P. 179.

de cinco jóvenes indígenas de la comunidad de Guatopolo e impusieron sanciones conforme a la justicia indígena por el asesinato de Marco Antonio Olivo Pallo.

La sanción consistió en que con la participación de las mujeres se sancionó a las cinco jóvenes con baños de agua fría y ortiga; una vuelta alrededor de la plaza pública desnudos cargando tierra y piedras; trabajo comunitario; expulsión de la comunidad; prohibición de participar en las fiestas y actividades sociales y culturales; el pedido de perdón público a los familiares y a la Asamblea, seguido de consejos por parte de los dirigentes; y el pago de una indemnización en beneficio de la comunidad y la madre de la víctima, siendo estas las sanciones más drásticas que las autoridades de la comunidad de La Cocha impondrían por afectar a la integridad y cohesión del colectivo.

La sentencia de la justicia indígena se ejecutó y concluyó con el perdón de la comunidad, la familia de la víctima y el agradecimiento de los sentenciados hacia la comunidad, así como también la reconciliación de los vínculos y lazos con la familia y la comunidad.

Sin embargo, la decisión de las autoridades indígenas no fue respetada por las autoridades de la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, entre otras instituciones gubernamentales, esto, en razón de la sanción que se impuso a los procesados, es más las mencionadas autoridades de la justicia ordinaria, consideraron que los dirigentes indígenas deberían ser apresados y procesados por delito de secuestro, razón por la cual iniciaron procesos judiciales en su contra.

Adicionalmente, el Juez Primero de Garantías Penales de Cotopaxi, determinó que los cinco jóvenes procesados habrían cometido el delito de asesinato y por tanto se ordena la prisión preventiva, y conforme el Código Penal ecuatoriano, el caos se sometió a Tribuna de Garantías Penales de Cotopaxi.

Es decir, los cinco jóvenes procesados por la justicia indígena y que además cumplieron la pena impuesta por las autoridades de la comunidad indígena, esta vez debían someterse a la justicia ordinaria y esperar la sentencia correspondiente.

Esta injerencia de la justicia ordinaria en el proceso de juzgamiento y en la sanción emitida por las autoridades indígenas provocó la indignación de los miembros de la comunidad, especialmente en la familia de la víctima, quienes manifestaron que tanto su familia como la familia de los acusados habían aceptado la sentencia de las autoridades indígenas.

Conforme se desprende del recurso constitucional, en casos anteriores de aplicación de la justicia indígena, las autoridades de la justicia ordinaria habían actuado con respecto y en el marco de la legislación constitucional y legal en esos casos, y por tanto se mantenían al margen de lo resulto por la jurisdicción indígena.

Es importante resaltar que con la Constitución aprobada en el año 1998, nace una nueva etapa constitucional en el país al ser declarado como un “Estado constitucional de derechos y justicia”, quedando claro la prevalencia del respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los convenios o tratados internacionales, la misma que se fortalece en el nuevo texto de la Constitución de la Republica aprobado en el año 2008.

En este sentido, el artículo 171 de la Constitución establecía que:

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial con garantía en la participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.

Es decir, la aplicación de la jurisdicción indígena tiene ciertas limitaciones respecto a que sus decisiones no deben ser contrarias a la Constitución y a los derechos humanos.

En este sentido, otra de las razones por las cuales se impugna la sentencia dictada por las autoridades indígenas en el presente caso, es por la existencia de delitos conexos, los mismos con los cuales se vulnera los derechos de terceros interesados, tales como, los presuntos asesinos, señalando en este sentido que conforme lo determina la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos se han vulnerado sus derechos



consagrados en las mencionadas normas jurídicas al haber impuesto como sanciones a los mismos tales como baños de agua fría y latigazos.

Como se mencionó en párrafos anteriores, con la aplicación de la justicia indígena se pretender resarcir el daño causado en un contexto más amplio, es decir, las repercusiones en la comunidad, es por esta razón, que las autoridades indígenas determinan sanciones físicas de “purificación” para que los infractores no vuelvan a cometer ningún tipo de acto ajeno a las buenas costumbres indígenas.

Son estas sanciones físicas las que son cuestionadas por las autoridades ordinarias, ya que se considera que la aplicación de las mismas son actos de salvajismo, sin embargo en la propia sentencia de la Corte Constitucional, se cita lo que la Corte Constitucional de Colombia considera respecto a la aplicación de las sanciones impuestas por la jurisdicción indígena, y señala *“La Corte Constitucional de Colombia, no constituye un atentado a los derechos humanos fundamentales”*<sup>20</sup>.

Cabe señalar que la administración de justicia indígena habitualmente se identifica con linchamientos, salvajismo o la aplicación de sanciones crueles que atentan contra los derechos humanos universalmente reconocidos.<sup>21</sup>

Sin embargo, desde otro punto de vista, se puede considerar que de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas el ejercicio de su jurisdicción especial constituye una forma autónoma de resolver y solucionar conflictos, siempre en busca de la armonía colectiva, es decir, en buscando el bienestar de toda la comunidad, lo cual lo llevan a cabo con la aplicación de medidas conciliadoras por parte de sus legítimas autoridades<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Sentencia Nro. 113-14-SEP-CC, Corte Constitucional del Ecuador.

<sup>21</sup> S. FIGUEROA VARGAS, *Jurisdicción Especial Indígena en Latinoamérica, una referencia específica al sistema jurídico colombiano*. Grupo Editorial Ibáñez, Barranquilla, Colombia- 2015, p. 9.

<sup>22</sup> S. FIGUEROA VARGAS, *op. cit.*, p. 10.

En el caso “La Cocha”, se observa una pugna entre la aplicación de la jurisdicción indígena y los alcances o límites de la misma, y la jurisdicción ordinaria para la resolución de conflictos al interior de los pueblos o nacionalidades indígenas.

La acción extraordinaria de protección presentada por el hermano de la víctima siguió su curso y la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció en los siguientes términos:

Respecto a la primera pregunta de que consta en el recurso constitucional, ¿Las autoridades indígenas adoptaron decisiones bajo competencias habilitadas, aplicando procedimientos propios, dentro de los parámetros constitucionales y de la protección de derechos humanos reconocidos por las convenciones internacionales?

En cuanto a esta interrogante, la Corte Constitucional realiza un análisis de la Constitución de la República, enfocadas en el carácter plurinacional y multiétnico del Ecuador, manifestando que el Estado reconoce y garantiza la diversidad cultural en todo el territorio del país.

En este sentido se analiza que la sanción adoptada por la jurisdicción indígena de la comunidad de La Cocha, se la adopto siguiendo el debido proceso, precisando además que *“(...) la justicia indígena del Pueblo Kichwa Panzaleo no juzga ni sanciona la afectación a la vida, en tanto bien jurídico protegido y derecho subjetivo de la persona, sino que lo asume, lo juzga y lo sanciona en tanto genera un conflicto múltiple entre las familias en la comunidad, que debe ser resuelto con el fin de restaurar la armonía de la comunidad; en este sentido, no se juzga el atentado contra la vida considerada individualmente. Por tanto, esta Corte constata que la justicia indígena, cuando conoce casos de muerte no resuelve respecto de la afectación al bien jurídico vida, como fin en sí mismo, sino en función de las afectaciones que este hecho provoca en la vida de la comunidad.”*<sup>23</sup>

También se determina otra interrogante ¿Las instituciones y autoridades públicas respetaron a la comunidad indígena implicada en el proceso de juzgamiento en examen, en especial, las decisiones de la justicia indígena?

---

<sup>23</sup> Sentencia Nro. 113-14-SEP-CC, Corte Constitucional del Ecuador.

La Corte Constitucional ecuatoriana se pronuncia en cuanto a esta interrogante y manifiesta que conforme lo determina el artículo 66 de la Constitución de la República el Estado reconoce y garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida, en este sentido, este es un derecho inherente a toda persona, por tanto, es una obligación de la sociedad y también del Estado el garantizar su efectivo cumplimiento ante cualquier posible amenaza.

Al respecto, existe una diferenciación en la justicia indígena y en la justicia ordinaria respecto a la vida como bien protegido, ya que en la justicia indígena la vida de persona es protegida siempre que esta protección aporte con la materialización del bien jurídico protegido, que correspondería a la comunidad indígena, mientras que en la justicia ordinaria el derecho a vida de una persona es respetado como tal, por el solo hecho de la existencia de un individuo.

Con este criterio, la Corte Constitucional señala que es el Estado el encargado de perseguir, investigar, juzgar, sancionar y tomar las medidas que considere pertinentes para la erradicación de cualquier tipo de conducta que atente contra este derecho consagrado en la Constitución y en la normativa internacional.

Bajo este orden de ideas, se entiende que pese a que las autoridades indígenas gozan de autonomía jurisdiccional para la resolución de controversias internas en cada comunidad, no se encuentran condicionadas a proteger la inviolabilidad de la vida, es decir, que las pueblos y nacionalidades indígenas si bien forman parte de comunidades en las que se aplican sus propias costumbres, también son ciudadanos de la República de Ecuador y forman parte de la sociedad ecuatoriana, por tanto, tienen la obligación y responsabilidad de precautelar el derecho a la vida consagrado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En este sentido, surgen varios cuestionamientos respecto a la forma en que las comunidades indígenas deben aplicar las disposiciones Constitucionales, es decir, que criterio deben considerar para la aplicación de su propia jurisdicción. Al respecto es importante determinar que las leyes ordinarias no forman parte del derecho ancestral que está basado en su mayoría por costumbres y es aplicado en las comunidades y pueblos indígenas, en este sentido, no es posible exigir a las autoridades indígenas la sujeción a tal o

cual ley para la aplicación de su jurisdicción respecto a la toma de decisiones al interior de sus respectivas comunidades, obligarles a la aplicación de las leyes ordinarias correspondería a la vulneración del principio de diversidad cultural también consagrado en la Constitución.

Sin embargo, el análisis de la Corte Constitucional en este sentido se encamina en cuanto a que en casos de violación del derecho a la vida son los Juzgados Penales los que tienen competencia para conocer, investigar, juzgar y sancionar a los autores del hecho punible incluso si la violación de este hecho se hubiere perpetrado al interior de un pueblo o nacionalidad indígena sin que exista interferencia alguna al derecho de autonomía jurisdiccional de los pueblos o nacionalidades indígenas.

*“Esta medida en nada afecta la existencia de un derecho propio de los pueblos o nacionalidades indígenas, derecho que tiene una amplia aplicación para el conocimiento y solución de los conflictos internos producidos entre sus miembros dentro de su ámbito territorial. El ejercicio jurisdiccional de las autoridades indígenas debe ser respetado, sin embargo, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, al igual que los derechos que amparan a todas las personas, no son absolutos, lo que equivale a decir que no existen derechos ilimitados; esto es, el derecho de crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio consuetudinario, así como la facultad de ejercer administración de justicia en casos de conflictos internos de la comunidad, están garantizados en tanto en cuanto no se coloquen al margen de los convenio internacionales de derechos humanos y de la Constitución de la República del Ecuador”.*<sup>24</sup>

Así también en cuanto a la intervención de los Juzgados Penales ordinarios determina que

*“Por consiguiente, sin que pueda hablarse de interferencia ni de disminución del derecho a la autonomía jurisdiccional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en caso de que ocurra un delito contra la vida dentro de una comunidad o territorio indígena, el Estado garantizará, al igual que en el resto del territorio nacional, que el mismo sea juzgado y sancionado de conformidad con las leyes propias del Derecho Penal Ordinario”.*

Conocidos los términos en los que se pronunció la Corte Constitucional ecuatoriana respecto a la aplicación de la jurisdicción indígena, se considera que es este organismo limita la aplicación de la justicia indígena al señalar que carece de competencia para conocer, resolver y sancionar cualquier violación al derecho a la vida dentro de los territorios indígenas, incluso entre individuos que pertenezcan al mismo.

---

<sup>24</sup> Sentencia Nro. 113-14-SEP-CC, Corte Constitucional del Ecuador.

Conforme a la sentencia de la CCE las autoridades indígenas con serían incompetentes de pleno derecho y por tanto es la justicia ordinaria o estatal la competente para conocer y resolver los casos de vulneración del derecho a la vida.

Sin embargo, el hecho de limitar la competencia material de los sistemas jurídicos indígenas no estaría alineado a las disposiciones que al respecto constan en la Constitución de la República y en la normativa internacional aplicable a los pueblos indígenas, por varias y puntuales razones:

1. En la Constitución de la República se reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional y multiétnico, y en ese sentido se reconoce la coexistencia de varias formas de justicia, es decir, se reconoce el pluralismo jurídico, en este caso a aplicación de la justicia ordinaria y la aplicación de la jurisdicción indígena, en esta última se reconoce sus sistemas jurídicos dándoles el mismo valor que a los sistemas de la jurisdicción ordinaria. Así también el derecho internacional se consagra la no subordinación de los pueblos o nacionalidades indígenas sino la existencia de relaciones de coordinación.

Así, con la sentencia se estaría yendo en contra de la norma constitucional e internacional que reconoce el pluralismo jurídico igualitario.

2. En el mismo sentido, en la norma constitucional se reconoce la aplicación de la jurisdicción indígena únicamente al interior de sus territorios, sobre hechos que ocurren de igual manera al interior.
3. Los pueblos indígenas al tener la potestad de determinar sus propias autoridades, de tener su derecho propio y en consecuencia ejercer sus propias funciones jurisdiccionales, la aplicación de su jurisdicción propia es una muestra de su derecho a la autonomía que se fundamenta en su libre determinación<sup>25</sup>.

En estricto sentido, la normativa internacional no limita la competencia de los sistemas indígenas, sino más bien no ponen límite a las materias sobre las cuales las

---

<sup>25</sup> Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Art. 3.

autoridades indígenas tienen competencia para impartir justicia aplicando su derecho propio.

El Convenio Nro. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas no mencionan impedimento alguno, es decir, las autoridades de los pueblos o nacionalidades indígenas tienen jurisdicción sobre cualquier materia, lo cual en la práctica era lo usual, incluso en Ecuador, hasta la expedición de la sentencia en mención.

En este sentido, ni el Convenio Nro. 169 de la OIT ni la Constitución de la República limitan las materias en las que las autoridades indígenas tienen competencia en aplicación de su jurisdicción, además cabe señalar que la Constitución reconoce que el Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.

Ahora bien, siempre debe existir un límite en la aplicación de los sistemas jurídicos, indistintamente, en este sentido, conforme se determina en el derecho internacional, el límite siempre será el respecto a los derechos humanos, es decir, al momento de aplicar la jurisdicción indígena se debe considerar que no se puede vulnerar los derechos humanos.

Conforme se establece en el Convenio Nro. 169 de la OIT, esta limitación significa que tanto los jueces ordinarios, como las autoridades indígenas carecen de competencia para vulnerar los derechos humanos, que en la práctica se traduce, por ejemplo a la inviolabilidad del debido proceso, tanto en la justicia ordinaria, en la que se debe respetar el debido proceso consagrado en la legislación nacional vigente y en el caso de la jurisdicción indígena debe aplicarse el debido proceso consagrado en su propio derecho.

Sin embargo y pese a que no existe norma expresa nacional o internacional que limite la aplicación de la jurisdicción indígena, la Corte Constitucional del Ecuador establece que los sistemas jurídicos indígenas no serán competentes para resolver los casos de violaciones del derecho a la vida. Lo cual significa que cualquier violación del derecho a la vida dentro de cualquier territorio en el que se aplique la jurisdicción indígena, incluso en cualquier

violación del derecho a la vida perpetrado por miembros de una comunidad indígena podrán ser resueltos por las autoridades indígenas en ejercicio de su jurisdicción.

En el territorio ecuatoriano cualquier violación del derecho a la vida será conocido única y exclusivamente por los Jueces penales ordinarios.

En tal virtud, respecto la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador en el caso *La Cocha* se puede determinar que el máximo órgano de administración de justicia constitucional del Ecuador, cuya misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional,<sup>26</sup> no respetó el marco jurídico constitucional ni el internacional en los cuales se reconoce la existencia de sistemas jurídicos indígenas. Por el contrario, determinó una serie de limitaciones a la aplicación de la jurisdicción indígena, sin considerar que los pueblos y nacionalidades indígenas no están subordinados a las instituciones del Estado, sino más bien sus autoridades aplican su propio derecho al interior de su territorio, lo que quiere decir que respetan todos los derechos incluso el derecho a la vida con fundamento en su propio derecho.

Es importante citar que la Corte Constitucional para la emisión de la sentencia en el caso *La Cocha*, requirió informes periciales para fundamentar la sentencia que se expediría en el presente caso, en ese sentido, considero relevante citar el informe pericial presentado por la profesora Esther Sánchez, ya que surge una problemática importante entorno a este caso, y es respecto a si los cinco jóvenes juzgados por la justicia indígena y que de acuerdo a la justicia ordinaria fueron encarcelados, se estaría juzgando a los mismos dos veces por el mismo delito, circunstancia que es importante aclarar, en virtud del reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, a decir de la profesora Esther Sánchez, respecto a este tema primero se debe acudir a la norma y en segundo lugar a los hechos y acontecimientos para examinar la situación, en este sentido, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto al ámbito de jurisdicción de la justicia indígena señala:

---

<sup>26</sup> <https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/quienes-somos/quienes-somos/vision-y-mision.html>

*“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de ámbito territorial, con garantías de participación y acción de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres”.*

Mientras que al ser cuestionado el juzgamiento y las sanciones es importante examinar si se respetan los principios de la justicia intercultural, señalados en el artículo 344 de la ley ibídem<sup>27</sup>.

En consecuencia, la actuación de las autoridades de la justicia ordinaria no respetaron el derecho propio, las costumbres y practicas ancestrales de los pueblos indígenas, en tanto, no se garantizó el “óptimo reconocimiento y valoración plena de la diversidad cultural”, en este sentido, el encarcelamiento de los jóvenes que siendo juzgados por la justicia indígena les pusieron a órdenes de la justicia ordinaria va en contra de la normativa vigente ya que se está sometiendo a los mismos a procesos de doble juzgamiento.

## 2.2.- LA JUSTICIA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PUEBLOS AMAZONICOS. -

Es otro el panorama cuando hablamos de los pueblos y nacionalidades indígenas situados en la amazonia ecuatoriana, ya que los mismos se han quedado varados en la época

---

<sup>27</sup> “La actuación y decisiones de los jueces y juezas fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarias y funcionarios públicos observarán en los procesos los siguientes principios:

Diversidad: Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y practicas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo reconocimiento y valoración plena de la diversidad cultural.

Igualdad: La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos y consecuencias jurídicas de lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán entre otras medidas, la intervención procesal de traductores peritos antropólogos, especialistas en derecho indígena.

Non bis in dem: lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la función judicial, ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional”.



de la conquista, y hasta la actualidad no se ha podido definir ni la frontera de la cultura de los pueblos, ni la frontera de los territorios, ni la de la organización autonómica, ni la frontera ecológica.

A los pueblos de la amazonia se les ha impuesto la aplicación de la legislación ya que, al ser pueblos no contactados, los gobiernos de turno han permitido el ingreso de empresas petroleras a los territorios amazónicos, con lo cual se ha forzado a los pueblos que habitaban en los mismos a allanarse a las disposiciones que las autoridades en el marco de la legislación nacional han tomado.

Si bien la Constitución de la República no hace ninguna distinción entre los pueblos indígenas y su forma de organización social y aplicación de sus costumbres para dirimir actuaciones al interior de los pueblos, no es menos cierto que en el caso de los pueblos amazónicos no se han determinado casos específicos en los cuales se tenga plena certeza de que se ha aplicado sus costumbres.

Sin embargo, las nacionalidades indígenas amazónicas Secoya y Cofán desconocen los procedimientos del sistema de derecho ordinario su funcionamiento y posible utilización, sin embargo, conocer cómo funciona su propio sistema y que es lo que tienen que hacer cuando surge un inconveniente al interior de su comunidad.

Otro pueblo Kichwa muy importante y que convive mucho más con el mundo mestizo, muestra mayor conocimiento respecto al sistema de justicia ordinario, sin embargo, en general, los miembros de las nacionalidades indígenas amazónicas no tienen pleno conocimiento de la aplicación de la justicia ordinaria, incluso desconocen las autoridades de la misma, identificando únicamente a los policías, militares, fiscales y jueces que según ellos conocen el “Libro de la Justicia”. Adicionalmente debe considerarse que las autoridades estatales que usualmente tienen más contacto con las autoridades de las nacionalidades indígenas son los tenientes políticos, el intendente y los comisarios.<sup>28</sup>

En términos generales, en Ecuador los pueblos y nacionalidades indígenas cuentan con diversas prácticas de administración de la justicia indígena, lo cual cuenta además con

---

<sup>28</sup> Revista Ministerio Coordinador de Patrimonio, Viviendo la Justicia. Pluralismo Jurídico y Justicia Indígena en Ecuador, ISBN 978-9942-07-238-2 V. Quito- Ecuador, marzo 2012, p. 41.

reconocimiento constitucional en procura de una igualdad con la justicia ordinaria, pero principalmente igualdad entre todos los ciudadanos ecuatorianos.

Del análisis realizado es claro que en el Ecuador no se han adoptado las medidas necesarias para la interpretación intercultural de los derechos humanos, por tanto, es necesaria la creación de los mismos al interior de la Corte Constitucional como organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, considerando las falencias que se han presentado en la justicia ordinaria.

En este sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas considera que *se podrá fomentar el desarrollo de una interpretación intercultural de los derechos humanos, sin que prime la visión universalista de los patrones occidentales ni el relativismo cultural. Uno de los principios básicos de los derechos humanos es la universalidad, entendida como la igualdad de derechos y dignidad de todos los seres humanos sin discriminación alguna; no obstante, para su efectiva promoción, respecto y protección, es preciso atender las distintas visiones y características de cada pueblo y cultura. Este mecanismo de revisión intercultural permitiría identificar los puntos de coincidencia y de discrepancia, los cuales serían objeto de un análisis profundo cuyo objetivo sería encontrar respuestas innovadoras desde a perspectiva intercultural que permitan la convivencia de diversas cosmovisiones en un país unitario, conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.*<sup>29</sup>

El caso *La Cocha* significó una oportunidad para que la Corte Constitucional se pronunciara sobre la aplicabilidad del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos. De esta manera tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, las instituciones del Estado, los movimientos indígenas y la sociedad ecuatoriana nos enfrentamos a dos retos muy importantes, por un lado un diálogo intercultural en plano de igualdad, que implica cambios mutuos, consensuados y voluntarios, y por otro la interpretación intercultural de los derechos humanos.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> <http://unsr.jamesanaya.org/esp/videos/video-conferencia-asamblea-nacional-del-ecuador>

<sup>30</sup> Revista Ministerio Coordinador de Patrimonio, *op. cit.*, p. 63.

### 3: EL RÉGIMEN JURÍDICO INDÍGENA DE ECUADOR Y LA PRÁCTICA INTERNACIONAL

Para los Organismos Internacionales es muy importante el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, para los órganos del Sistema Interamericano el respecto de los derechos de los pueblos indígenas es un asunto de vital importancia.

Es tal la importancia que le han brindado a los derechos de los pueblos indígenas de América que en el año 1990 se creó la relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de brindar protección a los pueblos indígenas, que son considerados como grupos históricamente excluidos y los más expuestos a violaciones de derechos humanos, otro objetivo importante que surge con la creación de la Relatoria sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es la importancia de sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en esta área.<sup>31</sup>

En este sentido, cabe resaltar que los organismos internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas, poco o nada se han pronunciado respecto a la aplicación de la jurisdicción indígena al interior de los pueblos o nacionalidades indígenas sin distinción de ningún país de América. Los pronunciamientos de los organismos del Sistema Interamericano se enfocan principalmente en el reconocimiento de derechos, tales como el Derechos a la protección judicial, el concepto de derecho colectivo en relación de los derechos humanos, así como también la Comisión considero que *“se debe reconocer el derecho indígena a la autodeterminación y autonomía dentro de su territorio”*<sup>32</sup>.

Bajo este criterio y tomando en cuenta que los pueblos y nacionalidades indígenas son considerados como grupos vulnerables e históricamente excluidos, los organismos internacionales han basado su análisis en el respecto de los derechos humanos y la situación de los mismos frente a los pueblos indígenas de América Latina.

---

<sup>31</sup> <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp>

<sup>32</sup> Resolución de la CIDH sobre el Procedimiento de Solución Amistosa sobre la Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, Caso N° 7964 (Nicaragua).

Sin embargo, de lo señalado, y debido a los cambios que se han dado en las legislaciones de los Estados americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió que una organización social peruana encargada de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, intervenga en una audiencia temática llevada a cabo el 25 de marzo de 2015, en la misma que se expuso sobre la jurisdicción indígena y derechos humanos.

En la mencionada audiencia, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, manifestó los adelantos que, en las legislaciones de los Estados americanos, específicamente en los países andinos, con excepción de Chile, aduciendo que el reconocimiento de la existencia de un pluralismo jurídico se debe a la expedición del Convenio 169 de la OIT.

En la mencionada audiencia se hace notar la importancia de que los pueblos indígenas cuenten con un sistema jurídico propio, mediante el cual, como se mencionó en el capítulo anterior los pueblos indígenas tengan la capacidad de establecer reglas, normas, principios, valores y lo más importante puedan administrar justicia con un sistema propio y también con sus propias autoridades, con lo cual se regula la vida social al interior de sus pueblos

Este reconocimiento por parte del derecho internacional se encuentra consagrado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación de los pueblos, lo cual se ha visto replicado en las legislaciones nacionales.

En virtud de esta audiencia temática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH, mediante comunicado de Prensa 28/11 sobre el 141o Período de Sesiones de la CIDH,<sup>33</sup> se ha pronunciado sobre la situación de los pueblos indígenas, y manifiesta:

*“Finalmente, en una audiencia sobre jurisdicción indígena y derechos humanos, se recibió información sobre la falta de respeto por la aplicación de sistemas jurídicos ancestrales por las autoridades indígenas. La CIDH recuerda que el ejercicio de la jurisdicción indígena constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, el cual está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos”.*

---

<sup>33</sup> Anexo 28/11 sobre el 141o Período de Sesiones de la CIDH, <http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/028A.asp>

El pronunciamiento de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en torno al reconocimiento de la jurisdicción indígena en América, no se ha enfocado como tal, sino más bien como el reconocimiento de derechos que en el ámbito internacional se les ha reconocido a los pueblos indígenas, específicamente el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, bajo el amparo de este derecho internacionalmente reconocido los pueblos indígenas de América, específicamente del Ecuador han hecho ejercicio de su autonomía para tomar decisiones al interior de sus comunidades y así también contar con sus propias autoridades.

Al respecto, es importante resaltar que el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, aparte de reconocer el régimen jurídico de un pueblo indígena, se reconoce también la facultad de los mismos para decidir libremente su régimen político y buscar el desarrollo económico, social y cultural<sup>34</sup>.

Conforme lo determina el artículo 1.2. de la Carta de las Naciones Unidas que señala:

*“Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.*

Lo que significa que el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos, en el caso de los pueblos indígenas es de vital importancia, ya que con el mismos se estaría reconociendo no solo su existencia sino también su condición de pueblo que cuenta con derechos, al igual que los demás pueblos del mundo.

En este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señala:

*“los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”.*

---

<sup>34</sup> S. Pritchard, *Setting International Standards: An Analysis of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the first six sessions of the Commission on Human Rights Working Group*, junio de 2001.

Disposición que guarda concordancia con el artículo 34 de la Declaración ya que en la misma se faculta a los pueblos indígenas a:

*“promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres o sistemas jurídicos (...)”*

De lo anterior se desprende que el derecho a la libre determinación que la ONU, a través de la Declaración sobre los pueblos indígenas ha considerado que el mencionado derecho de los pueblos indígenas, va íntimamente ligado a los derechos políticos de los pueblos indígenas, entre los cuales se puede mencionar el derecho a participar en la adopción de decisiones en asuntos que afecten sus derechos al interior de los mismos, así como también la obligación que tienen los Estados de celebrar consultas y cooperar con ellos para obtener su consentimiento en asuntos que tengan que relación con cada pueblo o nacionalidad indígena, previo a la adopción y aplicación de medidas administrativas o legislativas.<sup>35</sup>

En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyen en su artículo 1 el derecho a la libre determinación, en todo su contexto, por tanto, un dato importante es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha aplicado análogamente en el contexto de los pueblos indígenas, bajo la idea de que los derechos relativos al empleo, la familia, la salud, la alimentación, la educación y especialmente la cultura tienen que ver con situaciones a las que hacen frente los pueblos indígenas<sup>36</sup>.

Las Declaraciones Internacionales de protección de los Derechos Humanos y los instrumentos expedidos en el Sistema Americano de Derechos Humanos, reconocen derechos a los pueblos indígenas, los cuales se ven reflejados en las legislaciones nacionales de cada país que cuenta con población indígena. En el caso de Ecuador, la

---

<sup>35</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, *Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas*, Folleto informativo Nro. 9/Rev. 2, Ginebra, 2013., p. 5.

<sup>36</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, *Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas*, op. cit., p. 23.

Constitución de la República contempla los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos.

Es importante señalar, que el Estado ecuatoriano ha reconocido la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en consecuencia ha reconocido la vinculación de la jurisprudencia que la Corte Interamericana emite en los casos que sentencia.

En este sentido, en la sentencia emitida en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador el 27 de junio de 2012, la CIDH, determina:

*“263. (...) En este sentido, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen los derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”.*

De lo anterior se desprende que la Corte reconoce la intervención de autoridades competentes y la aplicación de recursos efectivos para la resolución de casos que tengan que ver con aplicación de la jurisdicción indígena, en base a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los instrumentos americanos e internacionales de protección de derechos humanos.

En el mismo sentido, la sentencia emitida en el caso Sarayaku Vs. Ecuador, contempla:

*“264. Además, en lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulneración, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.”*

De lo anterior se desprende desde otro ángulo el tratamiento de los pueblos indígenas en América, el mismo que gira en torno a la administración de justicia por parte del Estado, como protector y garantista de derechos humanos, es decir, enfocado en las acciones que el Estado realiza para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, en los países de América latina son los propios Estados, los que con sus acciones y decisiones vulneran los derechos humanos de los pueblos indígenas

consagrados tanto en la legislación de cada país, como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al respecto, en el CIDH así como también en la Corte IDH, se han ventilado casos cuyos actores son pueblos indígenas que demandan al Estado ecuatoriano a fin de que se respeten los derechos internacionalmente reconocidos.

### **3.1.- LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE ECUADOR**

El informe realizado por la Comisión IDH, es un informe general en el que se contempla el estado de los Derechos Humanos en Ecuador, el mismo fue emitido en el año 1997, y desde entonces la CIDH, no se ha pronunciado al respecto.

Dos capítulos del informe se refieren a los derechos de los Pueblos Indígenas: el capítulo VIII, referente a la “Situación de los Derechos de los Habitantes del Interior del Ecuador afectados por actividades de Desarrollo”; y, el capítulo IX referente a los “Derechos Humanos de importancia especial para los habitantes indígenas del País”, estos dos capítulos marcaron un precedente importante para en el área de los derechos humanos y el medio ambiente en el Ecuador.

El pronunciamiento de la Corte IDH en relación a los pueblos indígenas de Ecuador, surge por petición de representantes de los pueblos indígenas amazónicos, quienes ha sufrido la vulneración de varios derechos derivados de la exploración y explotación petrolera en tierras tradicionales de los Huaorani y otros pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

Si bien el pronunciamiento del CIDH fue emitido en el año 1997, el informe emitido por los dirigentes indígenas estaba direccionado a la vulneración de los derechos indígenas debido a la contaminación ambiental, en el mismo se presentaron pruebas que demostraban que la explotación de petróleo se llevaba a cabo cerca o en las mismas comunidades indígenas, lo cual contaminaba ríos y el suelo con elementos químicos tóxicos causando



enfermedades, severos problemas en la consecución de alimentos y agua y posibles muertes.

Es importante el análisis que realiza la CIDH ya que relaciona el impacto de la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana con el derecho a la vida, a la seguridad ambiental, estableciendo: *“La realización del derecho a la vida y a la seguridad e integridad física está necesariamente relacionada, y en algunas formas es dependiente, del entorno físico de la persona. En forma acorde, cuando la contaminación y la degradación plantean una amenaza persistente a la vida y salud humana, están implicados los antedichos derecho”*. Y en las conclusiones determina: *“Condiciones de severa contaminación ambiental, que puedan causar serias enfermedades físicas, daños y sufrimiento por parte de la población local, son inconsecuentes con el derecho a ser respetado como un ser humano”*.

En este sentido, transcurridos 20 años desde la publicación del informe por parte del CIDH, las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía no han cambiado, ya que se mantiene la exploración y explotación petrolera en los territorios pertenecientes a estos pueblos, manteniéndose también la contaminación y el peligro de muerte para los miembros de estos pueblos.

Desde la administración pública si bien se han generado mecanismos de control en cuanto a la explotación de recursos y usos de la tierra se mantiene el vacío con respecto a la obligación de respeto de los derechos humanos.

Sin embargo de lo señalado, es importante destacar el intento de las autoridades de acoger las observaciones realizadas por la CIDH, en relación a los derechos humanos protegidos por el Convenio Americano relacionadas con el medio ambiente, sin embargo se debe considerar que contemplar en la legislación nacional normativa que regula y prohíbe

la vulneración de derechos humanos, no necesariamente significa una efectiva salvaguardia a los mismos<sup>37</sup>.

Resulta sustancial el análisis realizado por la CIDH, en cuanto al respecto de los derechos de los pueblos indígenas, a más de lo que consta en líneas anteriores, porque también contempla como derecho a la participación de los pueblos indígenas es el acceso a un información comprensible y establece que *“En el contexto de la situación bajo estudio, la protección del derecho a la vida y a la integridad física puede impulsarse mejor a través de medidas que apoyen y aumenten la capacidad de los individuos para salvaguardar y reivindicar esos derechos. La búsqueda de la garantía contra las condiciones del medio ambiente que amenazan la salud humana requiere que los individuos tengan acceso a: información, participación en los procesos importantes de toma de decisión y a los recursos judiciales”*.

En relación a lo señalado en el párrafo anterior, en el Ecuador se notan los avances en el tema y la preocupación e interés por acoger las observaciones realizadas por la CIDH en cuanto al derecho al acceso a la información y principalmente en la participación en la toma de decisiones, entre otros derechos reconocidos para los pueblos indígenas en el Convenio Americano, se ven plasmadas al día de hoy en la Constitución ecuatoriana vigente desde el 2008, conforme la recomendación realizada en el informe del año 1997 del CIDH *“En el contexto de la situación bajo estudio, la protección del derecho a la vida y a la integridad física puede impulsarse mejor a través de medidas que apoyen y aumenten la capacidad de los individuos para salvaguardar y reivindicar esos derechos. La búsqueda de la garantía contra las condiciones del medio ambiente que amenazan la salud humana requiere que los individuos tengan acceso a: información, participación en los procesos importantes de toma de decisión y a los recursos judiciales”*.

Por otra parte, otro órgano integrante del Sistema Interamericano, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como máxima autoridad jurisdiccional a nivel

---

<sup>37</sup> F. Mackay, *Guía para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, Editorial Programa para los Pueblos del Bosque y Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Copenhague- Dinamarca. p. 65.

del sistema interamericano, con funciones en materia contenciosa y consultiva cuyo fin es la protección de los derechos humanos.

En este sentido, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son definitivas e inapelables, y los Estados están obligados a cumplirlas, conforme lo previsto en la Convención Americana y el compromiso asumido por los Estados que se deriva de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.

En virtud de lo anterior, las decisiones de la Corte son obligatorias, y los antecedentes y fundamentos de estas decisiones se convierten en jurisprudencia que enriquece el *corpus iuris* de los derechos humanos en el ámbito interamericano.

Ahora en el tema de derechos de los pueblos indígenas, las decisiones que al respecto se han adoptado han sido el fundamento para el desarrollo de la normativa de los Estados Americanos, ya que los diversos análisis que en esta materia la Corte ha realizado, han orientado a la creación, evolución y fortalecimiento del derecho interamericano y del derecho estatal.

En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce la participación y consulta de los pueblos indígenas, es así que en la sentencia de la Corte IDH, del Pueblo Indígena Saramaka Vs. Suriname, se emitió un importante criterio que ha sido incorporado en la Constitución de la República del Ecuador:

*“134. Asimismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre "consulta" y "consentimiento" en este contexto requiere de mayor análisis.*

*135. (...) En consecuencia, el Relator Especial de la ONU determinó que “[e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo”<sup>38</sup>.*

*136. De manera similar, otros organismos y organizaciones internacionales han señalado que, en determinadas circunstancias y adicionalmente a otros mecanismos de consulta, los Estados deben obtener el consentimiento de los pueblos tribales e indígenas para llevar a*

---

<sup>38</sup> ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, supra nota 97, párr. 66.

*cabo planes de desarrollo o inversión a grande escala que tengan un impacto significativo en el derecho al uso y goce de sus territorios ancestrales”.*<sup>39</sup>

Como se mencionó en párrafos anteriores, el consentimiento en los procesos de consulta, no se ha diseñado específicamente el consentimiento expreso que deben emitir los pueblos y comunidades indígenas, todos estamos conscientes de que existe responsabilidad objetiva y subjetiva por violación de este derecho humano reconocido por instrumentos internacionales que el Ecuador ha ratificado cuyas disposiciones consta en la normativa legal vigente la misma que en este tema específico debe mejor a medida que pasan los años.

Otro caso importante, que ha generado jurisprudencia en el caso Awas Tingni contra Nicaragua, en el cual se deja en evidencia la falta de reconocimiento y protección de los derechos de la comunidad Awas Tingni, específicamente el derecho a la propiedad por el uso y ocupación tradicional sobre sus tierras ancestrales al otorgar una concesión para la explotación maderera a una compañía extranjera<sup>40</sup>.

Mediante esta sentencia, la Corte afirma la necesidad de tener en cuenta el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, mediante el cual la posesión de la tierra crea una relación que puede equiparse como propiedad, lo que conlleva a que el Estado, al reconocimiento y registro de las titulaciones de los territorios tradicionales, en tal sentido, reconoce el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.

El caso del pueblo mayagna de Awas Tingni, fue el primer caso referido a los derechos de los pueblos indígenas que se puso en conocimiento de la Corte, en este sentido, la misma en su decisión fue muy progresiva, en cuanto a la manera en cómo se concibe el derecho a la propiedad. En este sentido, en primera instancia se consideró el referido derecho desde una dimensión colectiva o un derecho comunal.

---

<sup>39</sup> El CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) ha observado que “en cuanto a la explotación de los recursos que yacen en el subsuelo en tierras tradicionales de comunidades indígenas, el Comité observa que la mera consulta con estas comunidades no es suficiente para cumplir con los requisitos establecidos por el Comité en su recomendación general XXIII sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Comité, por lo tanto, recomendando que se obtenga el consentimiento previo e informado de dichas comunidades”. Cfr. Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, Consideraciones de los Informes presentados por los Estados Partes conforme al artículo 9 de la Convención. Observaciones Finales respecto del Ecuador (sesión sesenta y dos, 2003), ONU Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 de junio de 2003, párr. 16.

<sup>40</sup> [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_79\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf)

Cabe señalar otro derecho importante que la Corte ha tenido en cuenta en relación a los pueblos indígenas y es el derecho a la propiedad, en este sentido la Corte invoca su propia jurisprudencia en cuanto a los derechos comunales de propiedad reconocidos a los pueblos indígenas con la cual fundamentan sus decisiones.

Bajo estas consideraciones, resulta importante citar la reflexión que la Corte señala en la sentencia del caso Yakye Axa Vs. Paraguay, que señala:

*Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1. (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su jurisdicción. Sin embargo, hay que resaltar que, para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. El mismo razonamiento debe aplicar la Corte, como en efecto lo hará en el presente caso, para valorar el alcance y el contenido de los artículos de la Convención Americana, cuya violación la Comisión y los representantes imputan al Estado.*<sup>41</sup>

En este caso, vale la pena resaltar, en cuanto a la reparación a los pueblos y comunidades indígenas, la Corte determinó que se asume como beneficiario de las reparaciones al pueblo Yakye Axa y explica que el caso de la mencionada comunidad las reparaciones adquieren una especial significación colectiva.

Por tanto, es claro el esfuerzo de la Corte por adaptar las medidas de reparación a las necesidades de las víctimas, que en el caso de los pueblos indígenas tienen un sentido colectivo característico de su cultura y tradiciones.<sup>42</sup>

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha evolucionado favorablemente, en cuanto a la concepción de la igualdad formal y la igualdad material, esto en relación a la afectación de los derechos humanos de ciertos grupos históricamente vulnerables. En tal virtud, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

---

<sup>41</sup> Corte IDH, caso Yakye Axa Vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 51.

<sup>42</sup> *Ibid.*, párr. 52.

muestran una interpretación del principio de igualdad en un sentido clásico, como igualdad *de iure*.

Sin embargo, en la jurisprudencia emitida por la Corte en los últimos años, se denota la consideración con la que se trata a ciertos grupos que se encuentran en situación de subordinación, cuyo ejemplo de esto es las sentencias emitidas en los casos Masacre de Plan Sánchez y Saramaka en los que la integralidad y dimensión de las medidas de reparación consistían en la restauración de las condiciones de vida digna de las víctimas. La jurisprudencia emitida por esta Corte no siempre sigue la misma tendencia, sin embargo, podría considerarse que se ajusta mayormente hacia la igualdad material, especialmente en cuanto a los casos en los que estén involucrados pueblos indígenas.

Existen varias opiniones respecto a la fundamentación del reconocimiento de los pueblos indígenas, entre las cuales se encuentran: el argumento culturista, la noción de reparación histórica y la apreciación de las condiciones de vulnerabilidad. Pese a que estas nociones servirían para determinar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, la Corte no ha determinado cuál de estos fundamentos sustentan los derechos de los pueblos originarios, pero de todas maneras pueden identificarse en las decisiones del tribunal.

De la revisión de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede determinar que los avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la luz de la jurisprudencia emitida por esta Corte, pueden agruparse de la siguiente manera:

a) Reconocimiento de los derechos colectivos. Según el Juez Sergio García Ramírez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde una dimensión colectiva, determina que:

*“La perspectiva convencional, que constituye el marco para la competencia de la Corte, no significa en modo alguno desconocimiento o reserva frente a derechos colectivos. Más aún, se reconoce- así lo he hecho, desde mi Voto razonado en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni- que los derechos individuales, derechos humanos en el sentido en el marco de los derechos colectivos. Por ello, la protección de aquellos constituye, lógicamente, una forma de preservar éstos; la inversa es válida; la tutela de los derechos colectivos, a través*

*de las normas e instrumentos que a ellos se refieren, concurre a la comprensión y repercute en la preservación de los derechos individuales. Así, no existe conflicto alguno, sino complementariedad estricta, entre estas dos “formas de mirar” el estatuto de las personas”.*<sup>43</sup>

Lo cual podría significar que, con la evolución de los derechos humanos, esto ya no sería concebido únicamente de forma individual, y que requieren de una dimensión colectiva para el respeto a los mismos.

Es decir, a lo que se refiere el Juez Sergio García Ramírez, es exclusivamente al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pues como se ha mencionado los pueblos indígenas de América han evolucionado en los últimos años, presentando notables diferencias en cuanto al aspecto cultural, resaltando la tendencia hacia la consideración de colectivos, lo cual fomenta la creación de organizaciones.

b) Reinterpretación del derecho a la propiedad privada. A partir del caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni, que como se mencionó fue el primero que llegó a conocimiento de la Corte, esta misma señala que el artículo 21 de la Convención Americana protege también el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, considerando el mismo desde una dimensión colectiva atendiendo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y la manera en que estos pueblos desarrollan su relación con la tierra.

c) El derecho consuetudinario y la costumbre indígena. La jurisprudencia de la Corte en cuanto a los pueblos indígenas ha encaminado al reconocimiento de las tradiciones indígenas, en este sentido, respecto al reconocimiento del derecho consuetudinario la Corte es clara en cuanto a que las reparaciones a los pueblos indígenas deben realizarse atendiendo a sus usos y costumbres, incluso en ocasiones se ha hecho referencia al derecho consuetudinario para identificar a los beneficiarios de las reparaciones<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup>Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006, Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 11.

<sup>44</sup> J. BARIOS ROMERO, *Derecho Constitucional, Derecho Interamericano y Derechos Indígenas: Avances y Frustraciones*, Visión Renacer Editores, Bogotá- Colombia, p. 279.

d) Reconocimiento del pensamiento indígena. En varios casos que han llegado a conocimiento de la Corte, la misma se ha pronunciado atendiendo la dimensión de lo que significa para los pueblos indígenas el uso de la tierra, cuyas implicaciones influyen en su subsistencia, cosmovisión religiosa y también la identidad cultural. La Corte ha realizado un esfuerzo importante en reconocer que la tierra es esencial para mantener la identidad cultural de los pueblos indígenas, ya que sus territorios son considerados espacios propios que les permiten conectarse con sus antepasados, creando un modo de vida que es consustancial a la experiencia de vida de un pueblo.<sup>45</sup>

e) Interpretación del Derecho a la Vida: Este es otro de los derechos taxativamente reconocidos en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando como referencia el caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala, en la cual se consideró que el derecho a la vida guarda estrecha relación con dar la posibilidad de acceso a condiciones necesarias para la vida digna. En relación con el reconocimiento del derecho a la vida relacionado con los pueblos indígenas la Corte avanza en el tema con la inclusión del derecho a la identidad cultural de los mismos en la comprensión en sentido amplio del derecho a la vida, *“la identidad cultural es un componente o agregado del derecho fundamental a la vida en su amplia dimensión”*<sup>46</sup>.

### 3.2.- PRONUNCIAMIENTOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN CASOS DE PUEBLOS INDÍGENAS DE ECUADOR

El Ecuador ha sido condenado por 13 ocasiones por la Corte IDH desde 1998, sin embargo, los casos que han llegado a conocimiento de esta Corte superan los 15, de los cuales el único que se refiere a pueblos indígenas, es el caso del Pueblo Sarayaku, relacionado con daños ocasionados por actividades petroleras.

---

<sup>45</sup> R. ROLDÁN ORTEGA, *Manual Para la Formación en Derechos Indígenas, Territorios, recursos naturales y convenios internacionales*, Ediciones Abya-Yala, Quito- Ecuador, 2005. Pág. 126

<sup>46</sup> Corte IDH, caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, voto razonado del Juez Antonio Augusto Cançado Trindade, Párr. 28



De lo anterior se desprende que el Estado ecuatoriano por varias ocasiones ha tenido que acudir a instancias interamericanas en las que se ha dado a conocer las vulneraciones de varios de los derechos de los pueblos indígenas tanto el Corte IDH como la CIDH, se han pronunciado, a favor del respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, es importante precisar que organizaciones indígenas de Ecuador en el periodo 157 de la CIDH, llevado a cabo el 04 de abril de 2016, en audiencia temática, expuso la situación del derecho de asociación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país que se han visto gravemente afectadas desde el año 2015, cuando el Gobierno nacional concedió la competencias de registro y legalización de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad que pertenece a la Secretaría de la Gestión de la Política.

### **3.3.- SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE IDH, RESPECTO EL CASO DEL PUEBLO INDÍGENA SARAYAKU VR. ECUADOR**

En el caso del pueblo Sarayaku en contra del Ecuador, es importante citar el primer antecedente normativo que surge en el presente caso, en este sentido cabe mencionar que, en el mandato del presidente de la República Dr. Rodrigo Borja Cevallos en el año de 1992, a través del Instituto de Reforma Agraria y Colonización se adjudicó de forma indivisa a varios pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana entre ellos el pueblo Indígena Kiwcha Sarayaku un territorio cerca del río Bobonaza.

En el año 1996 se adjudicó el bloque 23 al Consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), del cual el 65% abarcaba los territorios del pueblo Sarayaku.

Para ese entonces el Gobierno de la República de Ecuador, emitió el Decreto Ejecutivo respectivo, que permitiría a la empresa petrolera antes mencionada operar en el bloque 23, así también en el mismo Decreto Ejecutivo y en el contrato de participación se estableció como obligación para la empresa contratista la realización de un estudio de impacto ambiental. (EIA).

Dentro de las operaciones realizadas por la CGC, ha hecho incursiones en los territorios de Sarayaku, comenzando la explotación en este año, por tal razón y debido a la reactivación de la explotación sísmica del pueblo Kichwa Sarayaku se declara en Estado de emergencia, razón por la cual presentan recurso de amparo ante las autoridades judiciales ecuatorianas, sin embargo, el reclamo de las autoridades del pueblo Sarayaku, no se resolvería hasta la petición ante la CIDH.

Del periodo comprendido desde octubre de 2002 hasta febrero de 2003, los trabajos de la empresa petrolera CGC, avanzaron un 29% al interior del pueblo Sarayaku, para el efecto la mencionada empresa cargó 467 pozos con un total de 1433 kilogramos de explosivos y los dejó sembrados en el territorio de pueblo Kichwa Sarayaku que habitaban en el bloque 23.

En el año 2003, se suspenden la explotación sísmica de la empresa CGC en el bloque 23, y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, acepta el reclamo presentado por las autoridades del pueblo Indígena Sarayaku, y declara que la empresa petrolera CGC ha violado las disposiciones Constitucionales, el Convenio 169 de la OIT y el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Con posterioridad a la denuncia presentada ante la CIDH, se solicitó ante la Corte IDH, la adopción de medidas provisionales las mismas que fueron aprobadas el 06 de julio de 2004, así también la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 62/04 de 13 de octubre de 2004.

El 26 de abril de 2010 la CIDH presentó ante el Tribunal una demanda en contra de la República del Ecuador con lo cual se dio inicio al proceso contencioso ante la Corte IDH.

En la denuncia se desarrollan supuestas violaciones de carácter general e individual, referentes a las vulneraciones de derechos responsabilizando al Estado ecuatoriano de estas vulneraciones por el menoscabo de los derechos de la comunidad indígena, en el cual se especifica que no se realizó una consulta previa, libre e informada al pueblo Sarayaku, lo cual generó la inobservancia de varias afectaciones en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku.

Las víctimas del pueblo Sarayaku, solicitaron a la Corte IDH, declare al Estado ecuatoriano como responsable por la vulneración de varios derechos fundamentales individuales y colectivos, entre los cuales se encuentran, derecho a la propiedad, a la protección judicial, al debido proceso, a la libre circulación, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la vida, a la asociación, a la participación política, a la libre expresión, a la personalidad jurídica, a la libertad de religión y creencias, a los derechos del niño, a la igualdad, a la salud y a la cultura, que se encuentran detallados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al respecto, el estado ecuatoriano señaló que en el presente caso no se agotaron todas las instancias nacionales obligatorias para llevar un caso ante la Corte IDH, así como la inexistencia de obligaciones del Estado ecuatoriano con respecto al Convenio 169 de la OIT, respecto a los pueblos indígenas, en este sentido, solicita se declare inadmisible la petición y se archive la misma.

Es importante resaltar la importancia del informe de admisibilidad en el Sistema Interamericano, el mismo que es emitido por el CIDH, en razón de que en este informe se analizan las cuestiones de fondo de la causa

Con la solicitud presentada por los demandantes así con el informe del Estado ecuatoriano, la Corte IDH, emite el informe de admisibilidad, el mismo que, en términos generales, posee gran relevancia en los procesos del Sistema Interamericano, ya que la Comisión para declarar admisible un proceso el mismo debe cumplir con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 de la Convención Americana, además del Art. 47, mediante las cuales se expresa la capacidad de la persona o grupo de personas, entidad no gubernamental legalmente constituida en uno o más Estados miembros de la Organización, para presentar una denuncia ante la Comisión, que como lo determina el derecho internacional se perfecciona con la ratificación o adhesión a la Convención y el reconocimiento de la Comisión.

De acuerdo a lo que determina el artículo 46 de la Convención uno de los requisitos más importantes para poner en conocimiento de la Corte IDH, en este sentido, respecto al caso del pueblo Sarayaku, como se mencionó, el Estado ecuatoriano, objetó la

admisibilidad basado en el agotamiento de instancias internas y afirmando que el Estado no incumplió las obligaciones determinadas en el Convenio de la OIT, puesto que los hechos a los que se refiere la demanda datan del año 1996, antes de que el Ecuador ratifique este instrumento.

Respecto al agotamiento de los recursos de jurisdicción interna la Corte se ha pronunciado indicando que el Estado que alegue la falta de agotamiento de los recursos internos deberá señalar cuales son los recursos que se debían agotar. En este sentido, en el caso del pueblo Sarayaku, a decir del Estado ecuatoriano, al recurrir a una acción de amparo, desatendieron la vía efectiva para fundamentar sus pretensiones, siendo la vía contencioso administrativa la que tiene plena jurisdicción, conforme lo determina la normativa legal ecuatoriana aplicable en esos casos.

Sin embargo, la Comisión considerando la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, determinó que solo deben ser agotados los recursos adecuados, es decir, aquellos que permitan subsanar las presuntas violaciones a los derechos humanos, bajo el criterio de que “la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable”<sup>47</sup>. Bajo este orden de ideas, se entiende que la CIDH, en el caso del pueblo Sarayaku adoptó a la acción de amparo como la acción idónea basándose en la consideración de la Corte en el caso Awas Tingi, en que se consideró “la institución procesal del amparo reúne las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve”.<sup>48</sup>

Respecto al cumplimiento de este requisito, desde una visión nacional, es decir, considerando el orden jurídico del Ecuador, es totalmente discutible la postura que en este caso adopto el Estado ecuatoriano, en razón de que para el año 1998 la Constitución ecuatoriana preveía la acción de amparo con una proyección o naturaleza más cautelar que tutelar, por esa razón el Estado considero que el recurso adecuado que el caso del pueblo

---

<sup>47</sup> Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 64.

<sup>48</sup> Corte IDH, caso Awas Tingi Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 131.

Sarayaku debió plantearse es el contencioso administrativo el cual cuenta con plena jurisdicción para el conocimiento y resolución de estas causas.

Bajo este criterio y considerando que la acción de amparo es únicamente cautelar podemos decir que esta no plantea un proceso de conocimiento sino de precaución, pese que la misma fue concebida para defender cualquier clase de derechos consagrados en la Constitución o un tratado o convención vigente<sup>49</sup>, el caso del pueblo Sarayaku en cuanto a la acción de amparo no podía declarar nulo el acto administrativo mediante el cual se da vida a la concesión, sino únicamente preserva la situación jurídica existente.

Sin embargo, de lo anterior, y después de verificar la naturaleza del amparo sea esta cautelar o tutelar, ajustada al caso del pueblo Sarayaku se puede decir que con fundamento en los argumentos presentados por los mismos no buscaban entablar un proceso de conocimiento sino más bien mantener el marco fáctico y jurídico para conseguir que la empresa CGC no continúe con sus operaciones en los territorios del pueblo Sarayaku, con lo cual queda taxativamente fundamentado el requisito de agotamiento de los recursos internos para acudir al SIDH.

En el caso Sarayaku se adoptaron medidas cautelares y provisionales las mismas que fueron dictadas por la CIDH y la Corte conforme a su competencia, con el propósito de precautelar los derechos humanos y prevenir cualquier afectación a los mismos y solicitar a la Corte adopte las medidas cautelares señaladas conforme lo establece el Reglamento de la Comisión Interamericana, artículo 76 numeral 2.<sup>50</sup> Sin embargo, cabe diferenciar que las medidas provisionales a diferencia de las medidas cautelares no nacen del Reglamento de la Comisión sino de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, por tanto, son expedidas por la Corte IDH, conforme lo determina el artículo 63 numeral 2 de la Convención:

---

<sup>49</sup>J. VINTIMILLA SALDAÑA, La acción de amparo contra particulares: una vía para defender los derechos colectivos y difusos, en A. BERNAL (comp.) *De la Exclusión a la Participación, Pueblos Indígenas y sus Derechos Colectivos en el Ecuador*, Editorial Abya- Yala, Quito- Ecuador, 2000, p. 138.

<sup>50</sup> Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en su 137º periodo ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009 y modificado en su 147º periodo de sesiones, 2013.

*“En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que estén conociendo, podrán tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrán actuar a solicitud de la Comisión”*

En cuanto a la adopción de medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, en el caso James y otros vr. República de Trinidad y Tobago, el Juez Cançado Trindade, establece: “en cuanto a la jurisprudencia de la Corte, esta ha manifestado que las medidas provisionales tienen fundamentalmente un carácter no solo tutelar por cuanto se protegen derechos humanos; cuando se satisfacen los requisitos para aplicarlas, se transforman en verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo.”

En todos los casos en los que se dictan medidas cautelares y provisionales, en especial en el caso de pueblo Sarayaku, el alcance de las medidas ordenas por la Comisión, y se sustenta en el reconocimiento de la competencia del Estado, tanto de la Convención Americana como del Estatuto de la Comisión; el incumplimiento de las normas del SIDH conlleva a determinar una responsabilidad internacional, por lo que resulta indispensable considerar seriamente la obligatoriedad de las medidas cautelares.

Finalmente, y considerando los criterios de la CIDH, así como la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, se dicta sentencia en el caso del Pueblo Sarayaku vr. La República de Ecuador, bajo la solicitud de que se declare la violación de las siguientes disposiciones consagradas en la Convención.

1. Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con los Artículos 13, 23 y 1.1. del mencionado instrumento.
2. Artículos 4, 8 y 25 de la CADH, en relación con el artículo 1.1. de la misma.
3. Artículo 22 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
4. Artículo 5 de la CADH, en relación con el artículo 1.1., de la misma.
5. Artículo 2 de la CADH.

Conforme lo prescrito el artículo 66 numeral 11 de la CADH, las sentencias emitidas por la Corte IDH, deben ser debidamente motivadas y gozan de carácter definitivo e

inapelable, únicamente sobre la sentencia se puede plantear una solicitud de inconformidad conforme lo prescribe el artículo 67 de la Convención, que expresamente señala:

*“(…) En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de notificación del fallo”.*

La presentación de la mencionada solicitud no constituye un recurso de apelación ya que la República de Ecuador, en este sentido, tiene la obligación de cumplir con la sentencia al violar una disposición establecida taxativamente en la Convención la cual accorrió la responsabilidad internacional, conforme lo determina el artículo 68 de la Convención que determina:

*“1.- Los Estados Partes de la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.*

*2.- La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”.*

Conforme lo determina la Convención Americana de Derechos Humanos, el caso del pueblo Sarayaku, se violentaron varios de los derechos consagrados en el mencionado instrumento, así también por falta de elementos probatorios la Corte no se pronunció sobre la violación a otros varios derechos.

Sin embargo, respecto al Derecho a la Consulta, la Corte IDH, afirma que el pueblo Sarayaku, debió tener acceso a la información y reconocerse el derecho a la participación conforme lo determina la Convención, en razón de que, si bien el EIA para el inicio de la actividad extractiva estaba aprobado en 1997, el mismo fue aplicado en el año 2002, cuando ya en Ecuador se encontraba en plena vigencia una nueva constitución y también el Convenio 169 de la OIT.

Respecto al Derecho a la Propiedad, conforme lo determina el artículo 21 de la Convención, la Corte expuso que el derecho a la propiedad comunal se enlaza con su cultura y con los recursos naturales que se hallan en sus territorios, en este sentido la Corte determinó que:

*“el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con la protección de los recursos naturales que se encuentran en el territorio”.*

En este sentido, es clara la visión que la Corte tiene respecto la relación de los pueblos indígenas con el medio ambiente y la importancia de la relación entre estos, con el propósito de mejorar su subsistencia en la que los nativos la llaman “selva viviente”.

Un derecho que está estrechamente ligado al derecho a la propiedad es el Derecho a la libre circulación y residencia, reconocido en el art. 22 de la Convención, dentro del caso se presentó la situación respecto a la limitación de los habitantes del pueblo Sarayaku, por los ataques de terceros, situación que las autoridades ecuatorianas pese a tener conocimiento no realizaron nada al respecto, así como también la falta de acceso aéreo por las malas condiciones de la pista que no permitían el despegue ni el aterrizaje de aeronaves y finalmente, en el presente caso se evidencia la existencia de explosivos en el territorio del pueblo Sarayaku, lo cual limita la libre circulación de sus habitantes, información que fue corroborada por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del ramo.

Con estos antecedentes, la Corte constatando la presencia de explosivos en los territorios del pueblo Sarayaku, se considera que la misma es una medida de represión que limita el Derecho a la libre circulación por tanto declara la existencia de la violación a este derecho.

Finalmente, en la sentencia se contempla las medidas de reparación de daño causado, en el caso de pueblos Sarayaku vs. el Estado ecuatoriano se contempla el daño material y el daño inmaterial, de acuerdo a lo determinado por la Corte el daño material se refiere a “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso”<sup>51</sup>, y en cuanto al daño inmaterial la misma Corte IDH determina que “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las

---

<sup>51</sup> Corte IDH, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002, párr. 43.



alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”<sup>52</sup>.

En la sentencia emitida por la Corte sobre el caso del pueblo Sarayaku, se pueden evidenciar once parámetros marcados de reparación:

1. En cuanto al derecho a la libre circulación, la Corte ordena que el Estado ecuatoriano debe “neutralizar, desactivar y, en su caso, retirar la pentolita e superficie y enterrada en el territorio del pueblo Sarayaku”.
2. Se estableció el que se realice un cronograma y plan de trabajo entre el pueblo Sarayaku y el Estado ecuatoriano para cumplir lo detallado en el número uno en un plazo de tres años.
3. Se ordenó la consulta previa al pueblo Sarayaku en caso de futuras proyectos que implique potenciales afectaciones a su territorio.
4. Ordena al Estado ecuatoriano a adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para llevar a cabo de manera efectiva la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas asegurando la participación de las mismas en las decisiones que adopte el Estado ecuatoriano respecto a sus intereses.
5. Se ordena también que el Estado debe implementar programas o cursos con estándares nacionales e internacionales para funcionarios públicos militares, policiales y judiciales, en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en todos los niveles jerárquicos.
6. Respecto a la sexta medida de reparación adoptada por la Corte IDH, obliga al Estado ecuatoriano a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, bajo parámetros determinados por la misma Corte en la sentencia.

---

<sup>52</sup> Corte IDH, caso Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 318.

7. Así también y en la misma línea se obliga al Estado a publicar en un Diario Oficial el resumen de la sentencia, una vez en un diario de masiva circulación; y, a mantener disponible la sentencia por un año en un sitio web oficial.

Finalmente, y respecto a la publicación de la sentencia, la Corte ordena al Estado, transmitir la sentencia en una *“emisora radial de amplia cobertura en el suroriente amazónico, al resumen oficial de la Sentencia, en español, en kichwa y en otras lenguas indígenas de esa subregión, con la interpretación correspondiente. La transmisión radial deberá efectuarse cada primer domingo de mes, al menos en cuatro ocasiones. Para ello, el Estado cuenta con el plazo de un año, a partir de la notificación de la presente sentencia”*<sup>53</sup>.

8. En el caso en mención se ordena también el resarcimiento económico por el daño causado, por tanto, el Estado ecuatoriano deberá pagar al pueblo Sarayaku el valor de USD. 1.250.000,00 (un millón doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América más las costas y gastos procesales.
9. El Estado ecuatoriano debe presentar un informe ante la Corte IDH, sobre las acciones o medidas adoptadas para cumplir la sentencia.
10. La Corte ordena dejar sin efecto las medidas provisionales ordenadas en el proceso.
11. Finalmente, determina que conforme lo señala Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto a los deberes y atribuciones de la Corte, será este mismo organismo el que se encargará de la ejecución de toda la sentencia, es decir, que el Estado de cabal cumplimiento a la misma.

En base a lo expuesto, se debe resaltar la importancia del pronunciamiento de la Corte IDH, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en los territorios amazónicos, de cara a las explotaciones petroleras que hasta la presente fecha no se terminan en la Amazonía ecuatoriana y lo cual incluso en la actualidad el Estado

---

<sup>53</sup>Corte IDH, caso Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 308.

ecuatoriano debe aplicar considerando que en la Amazonía ecuatoriana persisten las actividades de exploración y explotación de petróleo en territorios en los que los habitan pueblos no contactados, pero que sin embargo de deben respetar y garantizar los derechos que les asiste por ser ciudadanos ecuatorianos.

### 3.4.-CASO TAGAERI Y TAROMENANE EN LA CIDH

Uno de los casos más significativos respecto a los pueblos indígenas ecuatorianos que ha llegado a conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el caso suscitado entre los pueblos indígenas amazónicos Tangaeri y Taromenani, en el mismo que se discutía la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de estos pueblos.

Respecto a este caso, es importante señalar como antecedente que los pueblos indígenas Tangaeri y Taromenane, son llamados pueblos no contactados que habitan en los territorios del Parque nacional Yasuní, son los últimos pueblos indígenas amazónicos de los cuales se tiene conocimiento de su existencia, en razón de que los mismos se encuentran en aislamiento voluntario.

La presencia de empresas petroleras, madereras y de colonos, ha ocasionado que estos pueblos se adentren a la selva, invadiendo territorios de otros pueblos indígenas y por tanto provocando guerras y conflictos entre estos pueblos. Debido a los antecedentes históricos de estos conflictos, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 552 de 29 de enero de 1999, el Presidente de la República declara que en la Amazonía ecuatoriana existirá una Zona Intangible Tangaeri- Taromenane- ZITT-.

En el año 2003, se produjo una matanza a 20 miembros Taromenane entre los cuales se encontraban mujeres y niños, en años posteriores se produjo la muerte de trabajadores madereros lo cual generó un ambiente de hostilidad en los territorios amazónicos.

La Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador, conjuntamente con personas preocupadas por la situación de los pueblos indígenas Tangaeri y Taromenane

presentan, en el año 2006 una petición ante la CIDH, por las violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, esta petición fue presentada contra el Estado ecuatoriano por la falta de adopción de mecanismos efectivos para proteger la existencia de los mencionados pueblos indígenas y su territorio ancestral.

La CIDH, en el año 2006 emitió medidas cautelares tendientes a proteger la vida y la integridad personas de los pueblos indígenas amazónicos en aislamiento voluntario. Fue en ese momento en que el Estado ecuatoriano adoptando las medidas cautelares emitidas por la CIDH, mediante decreto ejecutivo Nro. 2187, de 03 de enero de 2007, delimitó la Zona Intangible, pese a la negativa de las empresas tanto madereras como petroleras quienes se negaban a que el Estado ecuatoriano adopte estas medidas.

En este sentido, en la Constitución de la República expedida en el año 2008, se refleja la preocupación del Estado por precautelar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, y en su artículo 57, se establece:

*“Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la Ley”.*

Sin embargo, pese a que las autoridades ecuatorianas han adoptado una serie de políticas públicas para precautelar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pese a la adopción de las mismas, se han presentado serios atentados en contra de los derechos de estos pueblos.

La situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario se ha mantenido inalterable, ya que las decisiones de las máximas autoridades del Gobierno no guardan relación con lo que se proclama, un ejemplo de ello es la concesión del Campo Armadillo en el territorio amazónico de estos grupos, lo cual genera un riesgo inminente, y así también con lo que se demuestra que las autoridades no toman en seriedad la protección de estos pueblos aislados pero a la vez importantes en un país multicultural y pluriétnico como el Ecuador.

Alrededor de la concesión a Petroamazonas del campo Armadillo se han generado varios criterios, por un lado, conforme lo prescribe la Constitución de la República, no es posible la explotación petrolera en territorios en los que habitan pueblos en aislamiento voluntario, es decir, se debe resguardar su patrimonio y respetar su derecho a la vida y a la integridad, mientras que por otro lado, desde la Función Ejecutiva, a través del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, a través del cual miran de manera positiva la explotación petrolera, pese a cualquier restricción.

Varias personalidades ambientalistas y representantes indígenas ecuatorianos, manifiestan que la extracción del petróleo del campo Armadillo, pese a que los pueblos en aislamiento voluntario no estén situados exactamente en estos territorios, ponen en riesgo su vida y por tanto se estaría violando lo determinado en la Constitución.<sup>54</sup>

Ahora bien, siendo el Estado el encargado de precautelar los derechos de todos los ecuatorianos, en este caso de los pueblos indígena sin voz, al encontrarse en aislamiento, es claro que se debe implementar estándares medioambientales que no comprometan el ejercicio de los derechos humanos, en este sentido, la CIDH, señala: *“La Comisión reconoce que el derecho al desarrollo implica que cada Estado tiene la libertad de explotar sus recursos naturales, incluyendo (el otorgamiento) de concesiones y la apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, la Comisión considera que la ausencia de regulación, la regulación inapropiada o la falta de supervisión en la aplicación de las normas vigentes, puede crear serios problemas al medio ambiente que se traduzcan en violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana”*<sup>55</sup>, como efectivamente está sucediendo en Ecuador, se expiden normas para “subsana” y “salvaguardar” los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo el momento de practicar las mismas, queda limitado de cara a los intereses económicos del Estado.

No hay desarrollo en un país si el mismo no se encuentra en armonía con el respeto a los derechos humanos, y en un país declarado pluricultural y multiétnico, si no se respeta el

---

<sup>54</sup> <http://www.eluniverso.com/2011/09/25/1/1356/polemica-campo-petrolero-puede-amenazar-indigenas-aislados-ecuador.html>

<sup>55</sup> CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

derecho de los pueblos indígenas y de todos los miembros que lo conforman. Por tanto, es necesario la implementación políticas de desarrollo sostenible que permita al Estado asegurar la protección del medio ambiente y en este caso el medio ambiente de los territorios ancestrales en concordancia con la Constitución de la República, respecto a este tema, la CIDH, también se ha pronunciado manifestando, *“las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no impiden ni desalinean el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos afectados. Tal como se señala en la Declaración de Principios de la Cumbre de las Américas, solo podrá sustentarse el progreso social y prosperidad económica si nuestras poblaciones viven en un medio ambiente saludable y se gestionen con cuidado y responsabilidad nuestros ecosistemas y recursos naturales.”*<sup>56</sup>

#### 4.- CONCLUSIONES. –

1. No se ha logrado un reconocimiento de los Derechos de pueblos indígenas del Ecuador, por tanto, estos hasta la fecha se mantienen como grupos sociales tradicionalmente vulnerables, que anhelan por protección y reconocimiento social en todas las esferas públicas del país.
2. Los pueblos indígenas han tenido que acudir al ámbito internacional para solicitar protección, en razón al interior del Ecuador no han logrado la debida protección, mientras que internacionalmente existe todo un aparato jurídico tendiente a precautelar los derechos de los pueblos indígenas de América y del mundo, lo cual genera confianza en los miembros de los pueblos indígenas que cada vez solicitan la intervención internacional para la resolución de controversias entre los pueblos indígenas y los diferentes Estados, en este caso la República de Ecuador.
3. Las pretensiones colectivas de los pueblos indígenas y su conflicto con los Estados han desencadenado el reconocimiento del autogobierno y la autodeterminación, específicamente en Ecuador, se ha logrado el

---

<sup>56</sup> CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997

reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, lo cual ha sido un logro importante para la subsistencia de los pueblos indígenas, permitiendo de esta manera la solución de las controversias suscitadas al interior de su comunidad por miembros de la misma.

4. En la Constitución de la República del Ecuador se ha incluido un catálogo de derechos que digno de admiración, sin embargo, preocupa el efectivo cumplimiento y reconocimiento de todos los derechos consagrados en la misma, específicamente el sistema procesal aplicable ante la violación de los derechos humanos. No es desconocido que el Ecuador, ha recibido críticas por la ineficiente normativa y falta de aplicación de la existente, en cuanto al Derecho a la consulta, ejemplo de ello es el caso Yasuní ITT y el caso de los territorios de los pueblos Tagaeri y Taromenane.
5. Las medidas cautelares que nacen del Estatuto de la Comisión Interamericana y las medidas provisionales que nacen de la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen varias diferencias según la oportunidad procesal y el organismo competente, sin dejar de lado la naturaleza de estas medidas. Al final ambas son adoptadas para precautelar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
6. Mediante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han adoptado importantes decisiones y pronunciamientos en el ámbito del Derecho Internacional, sin embargo, en el caso específico del pueblo Sarayaku existió ineficiencia por parte de la CIDH en la sustanciación de este caso, en cuanto a la agilidad procesal con la que se trató el tema. La CIDH demoró más de 6 años en considerar la existencia de una presunta vulneración de derechos para que la Corte IDH trate el caso. En el Ecuador se ha tratado de exhortar a las autoridades de justicia para que se traten en eficacia y eficiencia los procesos que llegan a su conocimiento, por tanto, en el presente caso se considera que la justicia debe ser oportuna, eficaz y eficiente, dando el trato que los ciudadanos nos meremos.

7. En el Ecuador como en varios países en vías de desarrollo las controversias por las vulneraciones de derechos humanos nacen de las acciones ilegítimas e inconstitucionales adoptadas por las autoridades de turno, que con la excusa del desarrollo económico del país permiten se lleven a cabo actividad de explotación y extracción de petróleo, y actividades madereras sobreponiendo los intereses económicos por sobre los derechos fundamentales de los ecuatorianos.



## V.- BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS.

A. PARELLADA, América del Sur, en VINDING, Diana, *El mundo indígena 2002-2003*, Editorial IWGIA, Copenhague- Dinamarca, 2003.

C. HARE, Por un nuevo Estado, pluricultural y plurilingüe, en HERZFELD, Anita; y, LASTRA, Yolanda, *Las causas sociales de desaparición y del mantenimiento de las lenguas en las Naciones de América*, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora- México, 1999.

C. PÉREZ, *Justicia Indígena*, Universidad de Cuenca, Cuenca- Ecuador.

C. WALSH, Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico; en SALGADO, Judith, comp. *La Justicia Indígena: Aportes para un debate*; Ediciones Abya-Yala, 2000.

E. SANCHEZ, *Peritaje de antropología Jurídica*.

F. MACKAY, *Guía para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, Editorial Programa para los Pueblos del Bosque y Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Copenhague- Dinamarca.

G. GALARZA PAZ, Justicia y Derecho en la Administración de Justicia Indígena, en SALGADO, Judith, comp. *La Justicia Indígena: Aportes para un debate*; Ediciones Abya-Yala, 2000.

I. FAJARDO, *Pautas de Coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal*, Editorial Fundación Myrna Mack, 1999, Guatemala.

J. BARIOS ROMERO, *Derecho Constitucional, Derecho Interamericano y Derechos Indígenas: Avances y Frustraciones*, Visión Renacer Editores, Bogotá- Colombia.

J. VINTIMILLA SALDAÑA, La acción de amparo contra particulares: una vía para defender los derechos colectivos y difusos, en A. BERNAL (comp.) *De la Exclusión a la Participación, Pueblos Indígenas y sus Derechos Colectivos en el Ecuador*, Editorial Abya-Yala, Quito- Ecuador, 2000.

J. LARREA, *Manual de Procedimiento Civil*, Editorial Corporaciones y Estudios, Quito- Ecuador, 2002.

M. CABODEVILLA, Pueblos Ocultos, en Actas del Seminario Regional de Santa Cruz de la Sierra- 20-22 de noviembre de 2006, *Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y*

*contacto inicial en la Amazonía y el Gran Chaco*, Editorial IWGIA, Copenhague-Dinamarca. 2007.

N. PACARI, Pluralidad Jurídica; una realidad constitucionalmente reconocida, en J. SALGADO, comp. *La Justicia Indígena: Aportes para un debate*; Ediciones Abya- Yala, 2000.

R. LLASAG FERNANDÉZ, Derechos colectivos y administración de justicia indígena, en Judith Salgado, comp., *Justicia Indígena, aporte para el debate*, Ediciones Abya- Yala, Quito, 2002.

R. ORTEGA, *Manual Para la Formación en Derechos Indígenas, Territorios, recursos naturales y convenios internacionales*, Ediciones Abya- Yala, Quito- Ecuador, 2005.

R. YRIGOYEN, El debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho indígena en Guatemala, en Milka Castro y María Teresa Sierra, coord., *Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas en América Latina*, México, 1999.

S. FIGUEROA VARGAS, *Jurisdicción Especial Indígena en Latinoamérica, una referencia específica al sistema jurídico colombiano*. Grupo Editorial Ibáñez, Barranquilla, Colombia- 2015.

S. GRANDA M.; y A. MARTÍNEZ FLORES, eds. *Derechos de los pueblos indígenas del Ecuador. Guía para facilitar talleres*. Quito: Universidad Politécnica Salesiana y Red Internacional de Estudios Interculturales, 2007.

S. Pritchard, *Setting International Standards: An Analysis of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the first six sessions of the Commission on Human Rights Working Group*, junio, 2001.

X. RON, *El control constitucional de las Decisiones Jurisdiccionales indígenas en Ecuador*, Universidad Andina Simón Bolívar, Programa Internacional de Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional, Quito- Ecuador, 2011.

## **REVISTAS. -**

L. MACAS, La Lucha del movimiento indígena en el Ecuador, *Boletín ICCI (Instituto Científico de Culturas Indígenas)*- ARY Rimay, Año 4, No. 37, abril, 2002.

M. PONTE, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica; Estado multicultural y pueblos indígenas: autonomía y derechos colectivos. Ecuador y su nueva Constitución de 2008, un referente para los pueblos indígenas de América Latina, *Consejo Español de Estudios Iberoamericanos*, Santiago de Compostela- España, 2010.

Revista Ministerio Coordinador de Patrimonio, *Viviendo la Justicia. Pluralismo Jurídico y Justicia Indígena en Ecuador*, ISBN 978-9942-07-238-2 V. Quito- Ecuador, marzo 2012, p. 41.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, *Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas*, Folleto informativo Nro. 9/Rev. 2, Ginebra, 2013.

## **JURISPRUDENCIA. –**

Corte IDH, caso Yakye Axa Vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 51

Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006, Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 11.

Corte IDH, caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, voto razonado del Juez Antonio Augusto Cançado Trindade, Párr. 28.

Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr.64.

Corte IDH, caso Awas Tingi Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 131.

Corte IDH, caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002, párr. 43.

Corte IDH, caso Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador, sentencia de 27 de junio de 2012, párr. 318.

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador. Doc. EA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.

ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, supra nota 97.

Sentencia Nro. 113-14-SEP-CC, Corte Constitucional del Ecuador.

Resolución de la CIDH sobre el Procedimiento de Solución Amistosa sobre la Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito, Caso N° 7964 (Nicaragua).

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Sarayaku Vs. Ecuador.

## **CONVENIOS INTERNACIONALES Y LEYES INTERNAS. –**

Convención Americana de Derechos Humanos

Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Art. 3.

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en su 137º periodo ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009 y modificado en su 147º periodo de sesiones, 2013

Convenio 169 de la OIT.

Constitución de la República de Ecuador (11 de agosto de 1998)

Constitución de la República de Ecuador. (20 de octubre de 2008)

Decreto Ejecutivo Nro. 2845 de 03 de julio de 1995.

Decreto Ejecutivo Nro. 1040 de 08 de marzo de 2008.

## **PAGINAS WEB. -**

[www.codenpe.gob.ec/sidenpe.htm](http://www.codenpe.gob.ec/sidenpe.htm).

[http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com\\_content&view=article&id=187&Itemid=138&lang=es?TB\\_iframe=true&height=600&width=1000](http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=138&lang=es?TB_iframe=true&height=600&width=1000)

<http://www.secretariabuenvivir.gob.ec/sabias-que-en-el-ecuador-se-hablan-14-lenguas-ancestrales/>

<https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/quienes-somos/quienes-somos/vision-y-mision.html>

<http://unsr.jamesanaya.org/esp/videos/video-conferencia-asamblea-nacional-del-ecuador>

<http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp>

Anexo 28/11 sobre el 141o Período de Sesiones de la CIDH,  
<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/028A.asp>

[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_79\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf)

<http://www.eluniverso.com/2011/09/25/1/1356/polemica-campo-petrolero-puede-amenazar-indigenas-aislados-ecuador.html>

